

temente internacional lo llevó, también, a pasar gran parte de su vida en el extranjero. Al final de su larga trayectoria, sus ocasionales visitas a Chile se fueron pareciendo cada vez más a viajes oficiales de la realeza. ¿Y por qué no?

Según el escultor Rodin, el progreso existe en el mundo, pero no en el arte. A un nivel profundo, esto es cierto sin duda alguna. Sin embargo, algunos periodos sí son reconocidos como peculiarmente fértiles en la expresión artística, como *mejores* que otros. Podemos aventurar que, aun cuando el progreso económico de Chile era deficiente e incluso los problemas sociales se intensificaban, la «producción cultural» del país nunca fue más viva que en las décadas de 1950 y 1960. Y el ímpetu no se perdió en modo alguno durante los malos momentos que vendrían³¹. Muchas cosas pueden decirse sobre los chilenos modernos, salvo que carecían de creatividad.

³¹ Aún no es posible apreciar desde una perspectiva correcta el desarrollo cultural que se inició en la década de 1960. Tras el colapso de la democracia en 1973, muchos intelectuales en Chile se quejaban, con cierta razón, de un apagón cultural, que duró varios años, y diversas personalidades de la cultura se exiliaron. Entre ellas, Ariel Dorfman, muy conocido ya como crítico y que luego se haría internacionalmente famoso como dramaturgo y novelista. Un nuevo e importante talento poético internacional, Raúl Zurita, se abrió paso en el Chile de la década de 1980. El dramaturgo más notable del reciente periodo quizá sea Juan Radrigán. Sería injusto emitir comentarios aquí sobre los muchos escritores en prosa que han estado trabajando en las décadas de 1980 y 1990, aunque (en el momento de escribir este texto) parece especialmente interesante seguirle la pista al novelista Luis Sepúlveda.

Quinta parte

Democracia y dictadura

Entre 1964 y 1973, dos gobiernos reformadores, con distintas formas de retórica revolucionaria, trataron de producir profundas reformas estructurales en un esfuerzo por remediar los graves problemas sociales y el lento crecimiento económico de Chile. Al margen de cuáles hayan sido sus éxitos inmediatos, ni la «revolución en libertad» de la Democracia Cristiana ni la «transición al socialismo» de los partidos marxistas lograron sus objetivos. Los políticos de todos los sectores se fueron cargando ideológicamente cada vez más, mientras el panorama de la opinión pública se polarizaba de forma creciente durante la presidencia de Salvador Allende. Esta crisis en aumento llevó a la ruptura del sistema político en septiembre de 1973 y a la toma del poder por las fuerzas armadas. Bajo el severo liderazgo del general Pinochet, se impuso un programa económico neoliberal en Chile y se llevó a cabo una drástica reorganización nacional. Los resultados, inevitablemente, son mixtos. En un momento de sostenido crecimiento económico, basado de nuevo en las exportaciones, el régimen de Pinochet fue desafiado con éxito por la oposición democrática (liderada por los demócrata-cristianos y los socialistas), que, bajo la forma de una nueva y disciplinada coalición política, se hicieron cargo del país en marzo de 1990.

GOBIERNOS

1964-1970: Eduardo Frei
1970-1973: Salvador Allende
1973-1990: General Augusto Pinochet
1990-1994: Patricio Aylwin
Desde 1994: Eduardo Frei*

* hijo del presidente de 1964-1970.

Revolución en libertad, 1964-1970

*Juan Verdejo¹ como un rey
si gobierna Eduardo Frei.*

Eslogan de la Democracia Cristiana, (h. 1963)

LOS REFORMADORES SOCIALES CATÓLICOS

El Partido Demócrata Cristiano de Chile (el PDC) fue el primer partido de su tipo en llegar al poder en América Latina. Internamente, resultaría el partido político más fuerte de la segunda mitad del siglo xx. Como hemos visto, su linaje puede rastrearse hasta un grupo de jóvenes conservadores disidentes, en su mayor parte antiguos estudiantes de la Universidad Católica, incluidos los futuros dirigentes del PDC: Eduardo Frei, Bernardo Leighton, Rafael Agustín Gumucio y Radomiro Tomic. Éstos habían creado su propio partido, la Falange Nacional, justo después de la elección presidencial de 1938.

Los falangistas se habían ganado un gran respeto por su integridad política, pero esto no les ayudó mucho en términos electorales, al menos antes de mediados de la década de 1950. Otros «socialcristianos» (incluido el querido Dr. Eduardo Cruz-Coke) permanecieron en el redil conservador y, en 1949, formaron un nuevo Partido Conservador Social Cristiano, que durante uno o dos años obtuvo en las elecciones mejores resultados que la Falange. Dado que no tenía sentido contar con dos movimientos de esta índole en Chile, en junio de 1957 se fusionaron para formar el nuevo PDC.

Induciría a un gran error ver el desarrollo del PDC como una acción promovida activamente por la Iglesia. Dos sacerdotes de espíritu reformista, fray Fernando Vives y fray Jorge Fernández Pradel, incentivaron de alguna manera al grupo de la Falange original, pero los intereses de la jerarquía eclesiástica en términos de reforma social eran limitados en ese momento. Los reformadores programas de la Acción Católica creados en la década de 1930 sólo involucraron a una pequeñísima minoría de católicos. Ya en 1947, el tan querido arzobispo de Santiago, José María Caro (el primer cardenal de Chile), denunció a los falangistas

¹ Juan Verdejo: personificación simbólica del hombre común, inventada por el caricaturista Jorge Délano («Coke») y conocida a través de las páginas de su revista *Topaze*.

por no ser lo suficientemente anticomunistas. Este clima fue cambiando muy lentamente con la asimilación de las «encíclicas sociales» del Papado (*Rerum novarum*, 1891, *Quadragesimo Anno*, 1931) y el pensamiento de filósofos católicos modernos, como Jacques Maritain. En 1947, un jesuita activo y muy respetado, fray Alberto Hurtado (famoso por sus incursiones nocturnas en una camioneta verde donde recogía a niños indigentes para llevarlos a los orfanatos que él mismo fundó) creó su Acción Sindical y Económica Chilena (ASICH), en un renovado esfuerzo por incentivar el sindicalismo comercial católico. El obispo de Talca, de gran conciencia social, Manuel Larraín, dio su apoyo al falangista Emilio Lorenzini, cuyos esfuerzos por organizar a los trabajadores vitivinícolas en los alrededores de Curicó le supusieron una pena carcelaria (1953). Tanto la Iglesia como la Falange estaban cada vez más interesadas en movilizar el campo, que todavía se encontraba casi totalmente «desorganizado».

Después de su formación en 1957, el PDC hizo muy rápidos progresos. La votación inesperadamente buena que obtuvo Eduardo Frei en las elecciones presidenciales de 1958 aumentaron su creciente importancia nacional. Gabriela Mistral lo describió como un hombre «de ideas concretas, poco sentimental, pero de naturaleza noble»². Era serio, muy culto y también alto. Después de 1958, Frei y el PDC emprendieron un denodado esfuerzo por crear nuevas redes de apoyo en las universidades, en las «callampas», en el campo y, también, entre los nuevos votantes que llegaban en gran número a los registros electorales.

El símbolo electoral del PDC (una flecha con dos barras horizontales que atraviesan el eje vertical) simbolizaba su afirmación de que tanto el capitalismo como el socialismo podían ser trascendidos en una «sociedad comunitaria». Las definiciones de «sociedad comunitaria» nunca fueron exactamente precisas. Sin embargo, a pesar de lo indefinida que haya sido esta visión del mundo, el PDC encarnaba claramente una seria aspiración de reformas sociales (y también de reforma agraria) combinada con un tenaz vínculo con la democracia. En resumen, una «revolución en libertad».

Para entonces, la Iglesia había comenzado a ver, evidentemente, con mejores ojos tales objetivos. Bajo la dirección de fray Emilio Tagle (arzobispo de Valparaíso desde 1961), el mayor de los dos seminarios del país estaba formando a una nueva generación de sacerdotes con una mayor conciencia de los problemas de los pobres. Además, la Iglesia puso en funcionamiento toda una serie de nuevas organizaciones para articular su creciente empuje social. Un formidable jesuita belga, fray Roger Vekemans, encabezó su propio centro de investigaciones (DESAL), y fue el ideólogo de toda una plataforma de «reformas revolucionarias» para América Latina³. De mayor importancia incluso (tanto

² Eduardo Frei, *Memorias 1911-1934*, 1989, pág. 158.

³ La fuerte personalidad de Fray Vekemans ayudó a crear la impresión de que él era la *éminence grise* del gobierno del PDC después de 1964. Habiendo fallado, según su propia opinión, en salvar a Chile del comunismo, dejó el país a los pocos días de la elección presidencial de 1970.

para el PDC como para la Iglesia), fue la creación de los comités vecinales de base católica, los centros de madres y los clubes de jóvenes en prácticamente la mitad de todas las «callampas» que circundaban Santiago. En 1962, dos notables cartas pastorales de los obispos confirmaron el nuevo acento en la acción y la reforma sociales. Todos estos avances habían recibido los efectos producidos por la renovación internacional de la Iglesia, el *aggiornamento* producido en el pontificado de Juan XXIII y en el Concilio Vaticano II.

Frei y el PDC sin duda se beneficiaron con la autorrenovación de la Iglesia, a pesar de su sincera afirmación de que el PDC no era un partido confesional. Lo anterior se evidencia en los análisis del comportamiento de los votantes. Las encuestas del Dr. Eduardo Hamuy de 1958 y 1964 muestran que el apoyo a Frei (sin contar la contribución de la derecha en su victoria) provenía de una base social muy heterogénea: católicos, clase media urbana y parte considerable de la clase trabajadora. También parece cierto que muchos de los que se unieron al PDC en sus años de expansión eran «algo más conservadores que los miembros que llevaban mucho tiempo en el partido»⁴. La postura de Frei —entre los «reaccionarios sin conciencia» y los «revolucionarios sin cabeza», como señaló en una reunión política en Valparaíso⁵— tenía un atractivo evidente para un amplio espectro de la opinión pública. Y, en 1964-1965, se produjo un claro brote de simpatía por el PDC que parecía un buen augurio para la «revolución en libertad».

UN «PARLAMENTO PARA FREI»

Esta simpatía no era generalizada. Los partidos del FRAP pronto declararon su inmediata oposición al gobierno del PDC, al cual los socialistas le restaron importancia, en una frase ya gastada, designándolo como la nueva cara de la derecha. Los partidos de derecha naturalmente tenían la esperanza de que el PDC fuera menos reformador de lo que parecía. Frei los sacó pronto de su error. Sin embargo, dada su minoría en el Congreso, el PDC poco podía hacer a comienzos de su mandato para iniciar su programa legislativo. Con las elecciones parlamentarias de marzo de 1965, el PDC lo apostó todo bajo el lema «un Parlamento para Frei». De manera más bien inesperada, ganó la apuesta. Con sólo un poco más del 40% de los votos populares, el PDC logró ochenta y dos asientos en la Cámara de Diputados (mayoría) y aumentó sus senadores de tres a trece, no lo suficiente, sin embargo, para impedir que una oposición unida bloqueara su legislación⁶. El rasgo

⁴ Michael Fleet, *The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy*, Princeton, 1985, pág. 79.

⁵ *El Mercurio*, 1 de septiembre de 1964.

⁶ Trece mujeres fueron elegidas para el nuevo Congreso; porcentaje (6,5%) que, a pesar de ser pequeño, hizo avergonzar a la Casa de los Comunes británica o a *fortiori* al Congreso norteamericano de la época.

más notable de este «terremoto» electoral fue que casi eclipsó a la derecha, la cual bajó de un tercio de los votos (1961) a un octavo. Los radicales también perdieron terreno, mientras que la izquierda lo mantuvo. Tanto los socialistas (con vehemencia) como los comunistas (en forma más moderada) reiteraron entonces su oposición a Frei, aunque resentidos, puesto que el PDC estaba haciendo realidad su afirmación de que era el partido de la verdadera reforma, mientras los radicales consideraban una nueva alianza con la izquierda, muy a pesar de Julio Durán y sus seguidores.

Desgraciadamente, después del terremoto electoral vino uno de verdad, el más serio que haya afectado a Santiago en todo el siglo. Poco después, los problemas de Frei aumentaron aún más con la crisis internacional producida por la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana (abril de 1965). Esto provocó airadas manifestaciones en Santiago. Frei ya había afianzado la postura independiente de Chile, restaurando las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y con Europa Oriental (aunque no con Cuba, con la cual Alessandri había roto relaciones) y ahora volvió a hacerlo: Chile, sin el apoyo de los otros delegados de América Latina, condenó la acción del presidente Johnson ante la Organización de Estados Americanos. En 1965, las relaciones entre Chile y Estados Unidos volvieron a tensarse por la revelación de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos estaba auspiciando una investigación de ciencias sociales para ver el «potencial de guerra interna» de Chile. Esto fue considerado por algunos como un franco intento de espiar a la izquierda chilena y la gran molestia resultante hizo que dicha investigación, llamada grotescamente «Proyecto Camelot», fuera abandonada. Frei fue el último hombre que cayó en la retórica antiimperialista. A pesar de todo lo anterior, Estados Unidos estaba entregando a Chile cuantiosas sumas de dinero bajo la «Alianza por el Progreso» del presidente Kennedy (alrededor de 720 millones de dólares entre 1961 y 1970, la mayor cantidad, en términos *per cápita*, otorgada a cualquier país latinoamericano). Frei, sin embargo, creía en el fortalecimiento de los vínculos con Europa Oriental y viajó hacia allá en julio de 1965 para realizar una serie de visitas oficiales y de Estado muy provechosas. A su llegada al aeropuerto Los Cerrillos de Santiago, el presidente fue aclamado por una multitud de 100.000 personas. Tanto a escala nacional como internacional, la corriente parecía fluir en su favor.

Sin embargo, ningún reformador, como Maquiavelo señaló hace mucho tiempo, puede esperar que su vida sea fácil. En marzo de 1966, cuando las tropas mataron a siete trabajadores durante una huelga en la mina de cobre El Salvador, las diatribas de la izquierda ganaron credibilidad, incluso en el interior del PDC. La segunda asamblea nacional del PDC (agosto de 1966) reveló una división interna en tres facciones potencialmente seria: los «oficialistas», cuya lealtad a Frei era incondicional; los «rebeldes», que querían políticas mucho más radicales y mayor control del Partido sobre el gobierno; y los llamados «terceristas», cuyas críticas al gobierno eran más limitadas y que buscaban mayor com-

promiso en el interior del partido. Por el momento, los «oficialistas» no tuvieron dificultades para mantener el control.

Algunas de las dificultades del PDC, sin duda, provenían de la abrumadora dimensión de su triunfo en 1964-1965. Su decisión de gobernar por sí solo, sin aliados, era aberrante para las normas habituales de la política chilena. Las actitudes algo triunfalistas, por no decir arrogantes, de ciertos demócrata-cristianos (Radomiro Tomic y otros, incluso, hablaron de «treinta años en el poder») difícilmente iban a traerles amigos. Los emolientes tratos y concesiones de la política de coalición habían sido olvidados por este Partido recién llegado y con un éxito repentino entre los partidos tradicionales. Para algunos chilenos, los criterios del PDC al dispensar el patronazgo parecían más partidarios, incluso más ideológicos, de lo que habían sido cuando los radicales reinaban en el gallinero. La atmósfera política estaba cambiando de alguna manera. El escritor Cristián Huneeus, al volver a su país en 1966 después de tres años en Inglaterra, se preguntó si todavía sería posible vivir en Chile «como en el siglo XIX»⁷. No lo era. Tal como comentó sagazmente otro escritor en la misma época: «El poder se ha convertido en un supermercado. Antes era el almacén de la esquina»⁸.

LAS REFORMAS SOCIALES Y LAS FRUSTRACIONES ECONÓMICAS

Cuatro áreas de reforma específica tenían extrema prioridad para el gobierno del PDC: la «promoción popular», la educación y el bienestar, el campo y el cobre. La «promoción popular» (el fomento de la formación de redes de organización locales y de autoayuda, especialmente en las poblaciones «desorganizadas» de los barrios marginales) prendió con fuerza desde un comienzo y fue puesta bajo la tutela de una Conserjería nacional. Las juntas de vecinos, los centros de madres, las asociaciones de padres, los clubes para jóvenes y las asociaciones deportivas proliferaron. En 1970, según el gobierno, unas 20.000 «unidades» de este tipo habían cobrado vida, cerca de la mitad eran centros de madres con una cantidad de miembros total estimada en 450.000 mujeres.

En un comienzo, la izquierda se mostró cautelosa ante la «promoción popular», considerándola un sistema paternalista con el cual el PDC podía ganar una nueva y vasta clientela, con el fin de equilibrar la sostenida preeminencia de la izquierda en el movimiento sindical. Ya en 1968, consiguió Frei que el Congreso concediera estatuto oficial a las juntas de vecinos. No obstante, allí donde el PDC se aventuraba, otros lo seguían con suma facilidad, y, a finales de la década de 1960, la izquierda había realizado importantes avances

⁷ Autobiografía por encargo, 1985, pág. 88.

⁸ Leonard Gross, *The Last Best Hope. Eduardo Frei and Chilean Democracy*, Nueva York, 1967, pág. 132.



en las «poblaciones», como ahora se llamaba con más cortesía a las callampas. La izquierda también se mostraba muy a favor de impulsar las tomas de terrenos urbanos (para nuevas poblaciones) por parte de los sin hogar, algo que ocurrió regularmente durante 1969-1970 y también durante los comienzos de la década de 1970.

Tales tomas de terrenos urbanos simplemente reflejaban un problema creciente: con una población urbana en expansión (Santiago creció en 800.000 personas en la década de 1960) el gobierno no podía satisfacer la incesante demanda de vivienda. Ni siquiera consiguió cumplir sus propias metas. Aun así, entre 1964 y 1970, fueron construidas unas 260.000 nuevas casas (alrededor del 30% por la CORVI, una corporación de vivienda estatal creada en 1953) y se establecieron unas 200.000 «soluciones habitacionales» (este término particular cubría la provisión de sitios para proyectos de vivienda autogestionados). Otro programa específico, la *Operación Sitio* se encargó de alrededor del 30% de esas «soluciones». La preocupación del PDC por mejorar el servicio de salud también se vio reflejada en el hecho de que la cantidad de hospitales (y camas) se duplicó durante este periodo.

El esfuerzo por fomentar la educación fue notable: en términos de su porcentaje dentro del gasto público, la educación subió de un 15% a un 20%. El gasto militar en 1970 era de alrededor de un 12%. Y, como ha sugerido Harold Blakemore, «en el periodo se produjo un extraordinario fermento en todos los niveles educacionales»⁹. Se construyeron algo así como 3.000 nuevos colegios: en 1970, la educación primaria cubría el 95% de los niños en edad escolar. Se introdujeron una serie de nuevos textos de estudios muy creativos. En Chile no se ha visto nada comparable a estos cambios después de la década de 1960.

La reforma agraria marcó una cesura aún mayor con el pasado; en muchos sentidos, se trató de la quiebra más fuerte desde la Independencia. Para entonces, en palabras de Brian Loveman, Chile había tenido «seis años de drásticos cambios en el campo»¹⁰. Tanto Frei como el PDC habían estimulado con creces la sindicalización rural y comenzaron a realizar expropiaciones en la zona rural de manera sostenida. La antigua hegemonía de los terratenientes se veía así seriamente amenazada por primera vez en la historia del país.

Una simplificación en los procedimientos legales (febrero de 1965) permitió a los sindicatos comerciales del campo crecer mucho más rápidamente que antes. La cantidad de miembros de los sindicatos en su totalidad prácticamente se duplicó entre 1964 y 1970: cerca de la mitad de este aumento se debió a los nuevos sindicatos rurales, para los cuales se puso en vigor una Ley especial en abril de 1967. A mediados de 1970, había unos 500 de ellos, agrupados en tres «federaciones» (Triunfo Campesino, Libertad, Ranquil)

⁹ «Chile», en Nancy Parkinson (ed.), *Educational Aid and National Development*, Londres, 1976, pág. 343.

¹⁰ *Struggle in the Countryside*, Bloomington, Indiana, 1976, pág. 278.

con un total de alrededor de 130.000 miembros. La fuerza de trabajo sindicalizada todavía era una minoría en el campo, pero con el aumento del salario agrícola mínimo al mismo nivel del salario urbano, con las huelgas y las peleas, con leyes laborales a punto de entrar en vigor (aunque de manera selectiva) por primera vez, era obvio que el equilibrio del poder en el campo estaba cambiando. Al igual que con la «promoción popular», el PDC, sin duda, esperaba sacar dividendos políticos de estas acciones, pero una vez más, la izquierda aceptó el desafío: una de las tres nuevas federaciones campesinas, Ranquil, formaba parte de su red rural en expansión.

En sus primeros años, el gobierno del PDC hizo gran uso de la Ley de reforma agraria de Alessandri, ampliando tanto la CORA como la INDAP y expropiando unas 400 haciendas antes de mediados de 1967. No obstante, el gobierno naturalmente quería su propia Ley más ambiciosa. La necesaria reforma constitucional (Artículo 10.10) y la nueva Ley de reforma agraria tuvieron que soportar un prolongado paso a través del Congreso, pues ambas despertaban la ira de la derecha, en general, y de los hacendados, en particular. La Ley de reforma (Ley 16.625), firmada en julio de 1967 por Frei (durante una de esas espléndidas ceremonias públicas que tanto gustaban al PDC), hizo que todas las haciendas de más de 80 hectáreas «básicas»¹¹ fueran susceptibles de ser expropiadas; los propietarios tenían derecho a conservar una «reserva» de 80 hectáreas y a una compensación en la forma de un pequeño pago en efectivo y en bonos del gobierno a largo plazo. Las haciendas administradas de manera ineficiente fueron los primeros blancos de la expropiación. A finales del periodo presidencial de Frei, la CORA había expropiado más de 1.300 haciendas (entre el 20% y el 25% de todas las propiedades que se podían expropiar). La reforma agraria no se encontraba ni siquiera cerca de haber sido completada, pero sin duda avanzaba.

Inevitablemente hubo quienes quisieron ir más rápido. Las «tomas» de los campos por los campesinos, a menudo a instancias de la izquierda o de entusiastas agentes de la INDAP, se hicieron muy frecuentes: 400 entre 1969 y 1970. No es nada sorprendente que los terratenientes a veces se resistieran. El derramamiento de sangre no siempre se evitaba. El 30 de abril de 1970, Hernán Mery, encargado regional de la CORA, resultó herido mortalmente durante un enfrentamiento en una propiedad en Longaví (cerca de Linares) defendida por su combativo dueño. La reforma agraria había encontrado su mártir. En 1970, la movilización agraria ya era difícil de contener.

Una reforma agraria sería siempre plantea la pregunta sobre cómo debe organizarse después el campo. En Chile no faltaban las sugerencias. Los rebeldes del PDC (ejemplificados por Jacques Chonchol, vicepresidente de la INDAP) querían una reorganización

¹¹ Esto significaba 80 hectáreas de tierra irrigada en el Valle Central. Las propiedades de más de 80 hectáreas pero menos irrigadas podían eximirse, por ende, de la expropiación.

total. Los campesinos, por su parte, no compartían los puntos de vista de los intelectuales urbanos. En un comienzo, los fundos expropiados no eran subdivididos, sino que se convertían en asentamientos trabajados por un comité electo de campesinos y la CORA. Al cabo de cinco años, los socios de cada asentamiento tenían que decidir si querían seguir trabajando colectivamente o subdividir. A finales del periodo presidencial de Frei, se habían constituido más de 900 asentamientos: entre ellos, unos 100 ya habían tomado una decisión, la mayoría eligió continuar como unidades no divididas.

Los principales beneficiarios a corto plazo de la reforma agraria fueron, de hecho, los socios de los asentamientos. Con salarios que aumentaban rapidísimamente, casi se convirtieron en una nueva clase privilegiada en el campo. Los jornaleros y los temporeros (a quienes se les negaba la condición de socio) sacaron considerablemente menos beneficios. La INDAP luchó valientemente para constituir cooperativas entre los minifundistas y los aparceros del «sector no reformado», con cierto éxito por lo demás. Los terratenientes, por su parte, respondieron ante la amenaza de extinción reorganizándose, ampliando el SNA y promoviendo los sindicatos de empleadores y pequeños propietarios; además, mostraban así que los conservadores, al igual que los radicales, eran capaces de movilizarse. Algunos indignados granjeros a veces bloqueaban las carreteras para hacer públicas sus demandas. La producción agrícola aumentó levemente durante los años del PDC, a pesar del hecho de que 1968 conoció la sequía más desastrosa en la memoria de los chilenos. La mayor parte de este aumento provino del «sector no reformado» más que de los asentamientos, donde mucho de lo que se cultivaba o se criaba era consumido comprensiblemente por los mismos socios.

Cualquier programa de reforma ambicioso es forzosamente caro. El gasto público se duplicó entre 1964 y 1970 (de 8.453.000 a 16.161.000 escudos de 1969). Buscando otras fuentes de ingresos, era natural que Frei viera qué podía sacar de la industria del cobre. El objetivo era garantizar un mayor control sobre las compañías norteamericanas y elevar la producción, para aumentar las ganancias. Más que una nacionalización total, Frei estaba a favor de una política más cauta: la «chilenización», como se la llamó (la adquisición del 51% de las acciones de las compañías mineras). A cambio de concesiones tributarias, éstas aumentarían tanto la inversión como la producción. La Kennecott (cuya filial, Braden, administraba El Teniente) estuvo inmediatamente de acuerdo con la chilenización (diciembre de 1964). La Anaconda (dueña de Chuquicamata y El Salvador) opuso mayor resistencia. Ya en 1969, tras fuertes demandas de nacionalización por parte de la izquierda (y parte del PDC), Frei renovó las negociaciones con la Anaconda, que entonces pidió ser nacionalizada con las debidas compensaciones. El trato definitivo (junio de 1969) estipulaba la chilenización inmediata seguida por un traspaso final, lo que Frei llamó una «nacionalización pactada».

Mientras tanto, la producción aumentó y tanto la Kennecott como la Anaconda de-

sarrollaron planes para su mayor expansión. El propio gobierno realizó entonces una serie de nuevas e inteligentes acciones. El antiguo «Departamento del Cobre» (creado en 1954) fue elevado de categoría como CODELCO (Corporación del Cobre), asignándosele nuevas tareas así como una dotación de expertos. Los chilenos se volvieron mucho más importantes en los niveles gerenciales de las minas. Chile también estaba cobrando más importancia en la refinería, con una nueva planta (abierta en 1964 en Las Ventanas, al norte de Valparaíso), para complementar las antiguas obras de Paipote, cerca de Copiapó¹². La medida más importante, sin embargo, fue la intervención de los precios: desde 1966, el cobre se vendió a los precios que dictaba el Mercado de Metales de Londres, en ese momento el doble del precio aceptado por las compañías norteamericanas. Dado que ahora el precio del cobre estaba en ascenso, en parte debido a la guerra del Vietnam, esto significó un gran aumento en los ingresos por concepto de impuestos: entre 1966 y 1970, aumentó al doble las cifras de los años de Alessandri. El gobierno del PDC había tenido muy buena suerte.

En términos económicos generales, el gobierno del PDC tenía que equilibrar las exigencias en conflicto de la reforma, el crecimiento y la estabilidad. Su objetivo era promover una mayor producción y permitir que la reforma se mantuviera mientras se reducía la inflación. La primera etapa del régimen del PDC estuvo marcada por un momento de crecimiento total, repentino y bienvenido; sin embargo, tras este periodo, siguieron los últimos años de la década, que fueron menos impresionantes, con tasas de crecimiento más bajas y una inflación en alza, lo que significó menos recursos disponibles para los programas de reformas del PDC.

A pesar de lo anterior, se realizó entonces un esfuerzo consciente a favor de la racionalización y la planificación, cuyo mejor símbolo fue la creación de ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional). Para compensar los altibajos del comercio exterior, en abril de 1965 se puso en marcha una inteligente política de pequeñas devaluaciones regulares del escudo. Una serie de innovaciones fiscales —el aumento de los impuestos a la Renta y a las Ventas, el reajuste automático de otros impuestos específicos, la imposición de un impuesto patrimonial (sobre la fortuna) que afectaba a alrededor de 80.000 personas, la reevaluación de los valores de las propiedades, un nuevo impulso para detener la evasión de impuestos— significó la duplicación de los ingresos en concepto de impuestos directos en 1970. Esto, combinado con las mayores ganancias provenientes del cobre, permitió que Chile mantuviera una situación favorable en su balanza de pagos y que reuniera algunas reservas. Las exportaciones prácticamente duplicaron su valor. Se realizaron esfuerzos para diversificar los mercados de ultramar. En este sentido, hay que mencionar las iniciativas de Frei y de su afable ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Valdés, con el fin de promover programas de integración económica latinoamericana, especialmente

¹² En el Norte Chico, «Paipote» es el sobrenombre que se les da a veces a los grandes bebedores.

el nuevo Pacto Andino (1969, con Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y, posteriormente, Venezuela) en el que se depositaron muchas esperanzas.

Con respecto a la industria, el gobierno siguió una política más conservadora. Aun así, la elite empresarial (sólo parte de la cual sentía simpatía por Frei) y la SOFOFA estaban lejos de apoyar sus políticas. Esto se vio reflejado por la baja de un 20% en la inversión privada que se produjo en la década de 1960. A raíz de ello, el Estado se vio poco menos que obligado a jugar un papel más activo. De hecho, todo el programa del PDC puede ser visto como una extensión e intensificación de la tradición intervencionista del Estado que se había desarrollado desde el primer régimen de Ibáñez. Entre 1969 y 1970, el Estado era responsable de más de la mitad de todas las inversiones industriales. Tampoco descuidó las mejoras en infraestructura. La capacidad hidroeléctrica fue ampliada por el enorme proyecto de ENDESA en Rapel (cerca de Rancagua), que comenzó a producir energía en 1968. La Empresa de Telecomunicaciones (ENTEL), una nueva entidad estatal, comenzó a funcionar en un sistema de telecomunicaciones nacional. La ENAP construyó una refinería de petróleo en Concepción y continuó haciendo prospecciones petrolíferas en el extremo austral. El transporte también se vio beneficiado con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Pudahuel, el comienzo de las obras del Metro, diseñado por los franceses para Santiago, y la excavación del túnel Lo Prado de 2,75 kilómetros, que acortó considerablemente el viaje de Santiago a Valparaíso. El Estado también se mostró activo en una serie de empresas colectivas con firmas extranjeras, especialmente el impresionante complejo petroquímico instalado en Concepción con *Dow Chemical*.

Frei y el PDC heredaron y aplicaron la legislación liberal de Alessandri sobre inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras (especialmente norteamericanas) en la industria manufacturera fueron bienvenidas por el gobierno. Ya fuera a través de la creación de filiales locales o de la compra de firmas nacionales establecidas (como INSA, la compañía de neumáticos), las corporaciones multinacionales se afianzaron en el sector más nuevo y dinámico de la industria: la electrónica, la farmacia, el ensamblaje de automóviles. En 1970, unas cuarenta de las cien compañías chilenas más exitosas eran controladas por intereses extranjeros, incluidas las treinta principales multinacionales de Estados Unidos. En 1970, las firmas extranjeras controlaban cerca del 25% de todo el capital industrial. Dado que muchas de las nuevas industrias eran de gran densidad de capital, tenían poco impacto en los patrones de empleo. Y, aunque a finales de la década de 1960, Chile producía virtualmente todo tipo de bienes de consumo (incluidos artículos imperecederos, como equipos de televisión y lavadoras), gran parte de los bienes de capital debían ser importados. Los ventajosos términos en que operaban las firmas extranjeras, su creciente importancia en la manufactura, la repatriación de sus ganancias; todos estos aspectos se discutían mucho en la época.

A pesar de los genuinos signos de progreso económico (especialmente en 1965-1966), el perenne problema de la inflación continuó rondando al gobierno del PDC. Las primeras políticas de estabilización fueron bastante exitosas; el crecimiento era alto y la inflación disminuyó. Los aumentos en los salarios iban más allá de lo que el gobierno deseaba. A Frei le resultó imposible lograr una buena relación con los sindicatos del comercio. Los sindicalistas del PDC, efectivamente, se retiraron de la CUT, controlada por la izquierda, la principal federación sindical desde 1953. En 1967, Sergio Molina, el ministro de Hacienda de Frei, consciente de la baja en la tasa de inversiones, presentó un plan elegante pero absurdo en términos políticos: colocar el reajuste del 5% (para entonces el aumento anual tradicional de los sueldos y salarios) en un fondo de inversiones. Los empleados recibirían el 5% retenido en forma de bonos del gobierno a largo plazo y también prescindirían del derecho a la huelga por un año. El plan encontró inmediata resistencia. La oposición bautizó cáusticamente a los bonos a largo plazo «chiribonos»¹³ y la CUT realizó una huelga general de un día, durante la cual cuatro trabajadores y un niño fueron asesinados por la policía. El plan del «chiribono» se desvaneció.

Este episodio marcó un punto de ruptura crítico para la «revolución en libertad». La inflación aumentó nuevamente en 1968, 1969 y 1970. Con el crecimiento galopante de ésta, la sequía de 1968 que hacía subir el precio de los alimentos locales e importados, y los sindicatos que exigían nuevamente mayores salarios, se hizo cada vez más difícil mantener una política equilibrada. En su último discurso anual al Congreso, Frei denunció lo que llamó «el nuevo feudalismo», en otras palabras, los sindicatos de trabajadores y otros intereses particulares que ejercían una presión por conseguir demandas que iba más allá de los límites de lo que el gobierno consideraba razonable. Aunque las enmiendas constitucionales aprobadas en 1969-1970 sí aumentaron levemente el control del poder ejecutivo en materia económica¹⁴, había poco que Frei pudiera hacer para mantener en orden a los magnates.

En 1970, por ende, a algunos observadores les pareció que «el Gobierno había perdido en medida importante el control que había logrado sobre la situación económica»¹⁵. Sin embargo, las cifras económicas no nos dicen nada. Más chilenos se sentían más cómodos en 1970 de lo que nunca antes se habían sentido. Había muchos menos mendigos en las calles de Santiago que en otros tiempos. Desde la ventajosa posición de estar a tres años de distancia, el escritor y crítico de arte Jorge Elliott pensaba que «en 1970 Chile prosperaba. Parecía estar a punto de despegar hacia el desarrollo cabal»¹⁶. No obstante,

¹³ *Bonos + Chirimoyo* (de la fruta chirimoya, que se descompone rápidamente) es un modismo chileno para un cheque sin fondos.

¹⁴ Estas enmiendas también permitían realizar un plebiscito en caso de desacuerdo entre el presidente y el Congreso, la creación de un nuevo Tribunal Constitucional y la ampliación del sufragio a los analfabetos.

¹⁵ Ricardo French-Davis, *Políticas económicas en Chile, 1952-1970*, 1973, pág. 183.

¹⁶ *Chile y el subdesarrollo*, 1973, pág. 8.

también era cierto que algunas de las primeras promesas del gobierno del PDC se habían esfumado. Los antiguos dilemas seguían obstinadamente allí y eran inmanejables. En este sentido, Radomiro Tomic estaba en lo correcto al insistir, como lo hizo tan a menudo en 1969-1970, en que la «profundización» del proceso de reforma sería necesaria si el PDC lograba ganar un segundo periodo de seis años en la presidencia.

RADICALIZACIÓN, POLARIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN

En 1967, las perspectivas para una segunda presidencia del PDC no parecían muy buenas. La oposición al PDC no había disminuido. Las elecciones municipales (abril de 1967) dieron al gobierno y a la oposición la oportunidad de medir sus fuerzas. El apoyo al PDC se había erosionado. La derecha mostró un modesto repunte, al igual que los radicales. Los partidos del FRAP lograron éxitos más estimulantes. Tanto la derecha como la izquierda sufrieron algunos cambios interesantes. Los Partidos conservador y liberal, cediendo a la lógica de la época, finalmente, se habían fundido (mayo de 1966) bajo el nombre de Partido Nacional (cómo deben de haber sonreído las ilustres sombras de Montt y Varas!). La «nueva» derecha adoptó una postura de combate procapitalista: a finales de la década de 1960, los «momios» —con ese apodo bautizaron a los derechistas sus adversarios— recuperaron indudablemente su antiguo temple.

Mientras tanto, la izquierda, al tiempo que ganaba terreno electoral, se había debilitado a causa de sus luchas internas. En agosto de 1965, el nuevo Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) había sido fundado en la Universidad de Concepción. Sus pocos miembros activos, en su mayoría con estudios universitarios, adoptaron el enfoque guevarista respecto de la necesidad de una «lucha armada» para derrotar al capitalismo e instaurar un sistema revolucionario al estilo cubano. Un enfoque igualmente intransigente encontró aliados, por su parte, en algunos sectores del Partido Socialista. En su asamblea de Chillán en noviembre de 1967, el Partido se redefinió como marxista-leninista y declaró su objetivo de crear un «Estado revolucionario». Muchos socialistas, sin embargo, incluido Salvador Allende, continuaron defendiendo la estrategia electoral, al igual que los comunistas. Estos debates de la izquierda muchas veces llegaron a ser bastante duros.

La disensión interna no estaba restringida a la izquierda. En junio de 1967, los «rebeldes» y los «terceristas» se hicieron con la dirección del PDC. Las relaciones entre Frei y su partido se volvieron de pronto muy tensas. Un comité del PDC, encabezado por Jacques Chonchol (el líder rebelde), había esbozado recientemente un informe que defendía la «vía no capitalista de desarrollo». Bajo una nube de ampulosas generalidades, este documento exigía claramente una política muy radical, incluidas las nacionalizaciones y ciertos esquemas de control de los trabajadores. Aunque los disidentes fueron expulsados

de la dirección del partido en una asamblea del Comité nacional (enero de 1968) con la ayuda de una efectista aparición del mismo Frei, el descontento del ala izquierda del PDC y de su movimiento joven continuó madurando. En noviembre de 1968, Chonchol renunció a su cargo de vicepresidente del INDAP. La escisión del PDC parecía sólo una cuestión de tiempo.

El cambio se dejaba sentir en el aire casi en todas partes a finales de la década de 1960 y no sólo en la política. Las maravillosas canciones de los Beatles eran tan populares en Chile como en cualquier otro lugar del planeta. El *hippismo* de estilo norteamericano, es cierto, hizo pocos avances: unas cuantas escaramuzas entre algunos entusiastas del *rock* de pelo largo y unos «cuadrados» (Santiago, agosto de 1967) difícilmente podían agregarle mucho a la revolución de las costumbres de los jóvenes. El feminismo militante, la experimentación con drogas y el interés por las religiones orientales, tan evidentes en Estados Unidos, no afectaron en gran medida a Chile. Las barbas y el pelo largo se hicieron mucho más comunes en esos tiempos, es cierto; y los estilos de vestir, mucho más informales.

En 1967-1968, las universidades fueron sacudidas por el estallido de la revolución de los estudiantes, que comenzó en la Universidad Católica de Valparaíso ya en 1967 y se extendió a la Universidad Católica de Santiago y a la Universidad de Chile. No había elementos muy originales en estos movimientos estudiantiles (comparados con los de Francia y los Estados Unidos). En muchos sentidos, eran (o pronto se convertirían) en una simple extensión de la competencia más general entre los partidos. Sin embargo, sí se dio una excepción: el movimiento gremialista de derechas en la Universidad Católica de Santiago, encabezado por Jaime Guzmán, le arrebató al PDC el control de la Federación de estudiantes en 1968, centrando su atención estrictamente en los problemas de los estudiantes. En la Universidad de Chile, la pugna se daba entre el PDC y la izquierda, que ganó la Federación en 1969.

Sería absurdo suponer que estas manifestaciones de los jóvenes eran simplemente un eco de los movimientos de protesta norteamericanos o europeos. Había muchas carencias locales que podían alimentar la militancia estudiantil. Y las influencias generales latinoamericanas hacían su aporte al inducir un nuevo estado de ánimo mucho más radical. El general De Gaulle puede haber despreciado el episodio de la guerrilla boliviana de 1967 («el futuro del mundo no se decidirá en Bolivia»), pero no se puede negar su impacto en Chile. La radicalización también socavó el consenso «socialcristiano» que se había formado antes, en torno al PDC. En agosto de 1968, los sacerdotes y los laicos de un nuevo movimiento recién formado, la Iglesia Joven, organizaron una breve ocupación de la catedral de Santiago.

Un cambio cultural fuertemente asociado con esta radicalización fue la aparición de la llamada Nueva Canción Chilena, que después haría sentir su influencia en toda América Latina. En parte, esta tendencia constituía un rechazo consciente de la anodina música

comercial popular que emanaba de las aproximadamente 130 estaciones de radio del país. Gran parte de la inspiración inicial de la Nueva Canción provino del trabajo de la folclorista Violeta Parra. La apasionada y agitada vida de esta extraordinaria mujer terminó en febrero de 1967 (se suicidó), poco después de haber grabado su disco de *Últimas composiciones*. Esas canciones perturbadoramente hermosas quizá sean el legado máspreciado de la década de 1960 en Chile.

Y su conciencia dijo al fin:
cántale al hombre en su dolor,
en su miseria, y su sudor,
y en su motivo de existir.

Ángel e Isabel, hijos de Violeta, inauguraron su Peña, ahora legendaria, en Santiago, en 1965. En los años siguientes, ésta se convirtió en el punto focal de la Nueva Canción, con apariciones regulares de cantantes, como los mismos Parra, Rolando Alarcón, Patricio Manns y, quizá el más memorable, Víctor Jara, que más tarde encontraría un final horriblemente brutal en manos de los militares en 1973. Grupos instrumentales, como Inti-Illimani y Quilapayún también surgieron de ese terreno tan fértil en términos artísticos.

No obstante, mientras la retórica y la emoción revolucionarias se volvían cada vez más manifestas, la izquierda no produjo una ola avasalladora en términos electorales. Con todo esto, quedaba en evidencia la polarización —entre las posturas de la derecha y la izquierda que estaban cada vez más afianzadas—. A finales de la década de 1960, también se produjo una creciente movilización generalizada, en el más amplio sentido del término. La cantidad de huelgas aumentó sostenidamente, en parte porque ya había muchos más sindicatos para organizarlas. La toma de los fundos aceleró su ritmo en el campo en 1969-1970, al igual que la ocupación de los terrenos urbanos a manos de los sin hogar. El MIR incentivaba activamente estos movimientos: en ciertas poblaciones («26 de julio» en Santiago, «Lenín» en Concepción) comenzaron a formarse rudimentarias «milicias populares». Fuertes manifestaciones estudiantiles y peleas a golpes entre grupos políticos rivales se hicieron perturbadoramente recurrentes.

Y lo que era más serio, desde marzo de 1968 habían comenzado a aparecer los signos de una campaña de terrorismo urbano menor: ataques con bombas al Consulado norteamericano, a los supermercados, a la casa del popular senador del Partido Nacional Francisco Bulnes e incluso a la tumba de Arturo Alessandri (agosto de 1969). Entre 1969 y 1970, el MIR realizó una serie de asaltos a bancos («expropiaciones» en la terminología mirista) e intentó varios secuestros de aviones, uno con éxito. Carabineros descubrió lo que se dio en llamar «escuelas de guerrilla» en el valle del Maipo (junio de 1969) y cerca

de Valdivia (mayo de 1970). Estas nuevas historias confirmaban las sospechas de la derecha de que el país se estaba desintegrando.

Las elecciones parlamentarias de marzo de 1969 trajeron nuevas derrotas para el PDC. Éste perdió veintisiete de sus puestos en la Cámara de Diputados, aunque aumentó su delegación senatorial a veinte. En comparación con 1967, la izquierda se mantuvo igual, pero la derecha mejoró su posición: los nacionales ocuparon su lugar como el partido más grande después del PDC. Casi antes de que tuvieran tiempo para reflexionar sobre estos resultados, los políticos se vieron inmersos en uno de esos trágicos desaciertos que empañan la historia de la humanidad: Carabineros, tratando de desalojar a los ocupantes ilegales de un terreno en la pampa Irigoin, en las afueras de Puerto Montt, mató a ocho personas e hirió a cincuenta más. El hecho ocasionó una de las más feroces canciones de protesta de Víctor Jara, en la cual señala con dedo acusador al duro ministro del Interior de Frei, Edmundo Pérez Zujovic. La izquierda atacó vehementemente a Pérez Zujovic. También lo hizo el movimiento joven del PDC. Puerto Montt fue la última gota para los disidentes del PDC. Al cabo de unas pocas semanas, éstos decidieron crear su propio partido, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (el MAPU, acrónimo que correspondía además a la palabra mapuche para «tierra») y aliarse con la izquierda. El Partido Radical también estaba en crisis. En este caso, el movimiento era en sentido opuesto: una serie de los miembros más derechistas del partido fueron expulsados. Después, en 1969, éstos también fundaron su propio Partido Demócrata Radical, cuyo miembro más destacado era el franco Julio Durán. El nuevo partido aprovechó el repunte de la revitalizada derecha.

EL «TACNAZO» Y EL TRIUNFO DE ALLENDE

El enérgico y elocuente Radomiro Tomic, al parecer el heredero de Frei, volvió a Chile en 1968, tras pasar tres años como embajador en Washington. Tomic había anhelado durante mucho tiempo una alianza más amplia entre el PDC y la izquierda, y por un tiempo había condicionado a ello su candidatura presidencial. La izquierda no tenía ninguna intención de desempeñar un papel secundario al lado de Tomic. «Con Tomic ni a misa», dijo el secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán, en 1968. A mediados de 1969, Tomic cambió de idea y, el 15 de agosto, fue designado como candidato del PDC para las elecciones de 1970. En las semanas siguientes, otros partidos anunciaron sus opciones: Chonchol por el MAPU, Salvador Allende por los socialistas y Pablo Neruda por los comunistas. La derecha, mientras tanto, puso sus esperanzas en el ex-presidente Jorge Alessandri, cuyo nombre por sí solo era mágico. El anciano no hizo ningún gesto de aceptación. Un giro inusual de los acontecimientos lo haría cambiar de opinión.

La última cosa que nadie habría esperado en Chile en 1969 era un golpe militar. Los chilenos creían que eran inmunes a ese virus en particular. A finales de la década de 1960, sin embargo, los militares empezaron a sentirse afectados por el desarrollo de los acontecimientos. El gasto militar había disminuido drásticamente desde la década de 1950. Frei prestaba poca atención a los hombres de uniforme, pero no los había olvidado: en un discurso de septiembre de 1967, subrayó las responsabilidades cívicas de las fuerzas armadas. En abril de 1968, unos ochenta bisoños oficiales del Estado Mayor presentaron su renuncia, alegando abiertamente ciertas privaciones. Presintiendo los problemas, Frei nombró a un general en retiro, Tulio Marambio, como ministro de Defensa. No obstante, los oficiales más jóvenes, en particular, no se tranquilizaron. Durante las celebraciones del «dieciocho» de 1969, un batallón del Regimiento de Yungay deliberadamente llegó tarde a la ceremonia con el fin de poner en aprietos al presidente.

Un mes después, el gobierno pasó a retiro en forma prematura al comandante de la Primera División del Ejército (Antofagasta), general Roberto Viaux, de quien se sospechaba que estaba conspirando. Y lo estaba. El 21 de octubre, Viaux usurpó el mando del Regimiento Tacna en Santiago y desafió al gobierno. «¡Nadie me podrá mover!» respondió el presidente Frei. Todos los partidos políticos (excepto los socialistas) se aliaron inmediatamente al presidente. La CUT llamó a una huelga nacional. Los camiones basureros municipales se alinearon fuera del palacio para impedir el inevitable ataque. Éste nunca se produjo. Algunas unidades leales del Ejército (y una gran multitud de festivos mirones) se apostaron cerca de las barracas de ladrillo rojo del Tacna. El general Viaux, «un milico con cara de milico», según uno de los periodistas que lo entrevistó¹⁷, insistió en que su «movimiento» no era más que una forma de hacer pública la difícil situación del Ejército —casi el equivalente militar de una huelga o toma—. Temprano al día siguiente, Viaux se rindió. Como resultado del «Tacnazo» (como se apodó el episodio) la mayoría de sus demandas estilo sindicato fueron satisfechas: el general Marambio y el comandante en jefe del Ejército renunciaron, y el Congreso, con inusitada rapidez, votó un aumento sustancial en la paga de las fuerzas armadas.

Dentro del Ejército, los trastornos causados por Viaux significaron meses de minucioso trabajo de reparación para el nuevo comandante en jefe, general René Schneider y su leal jefe del Estado Mayor, general Carlos Prats. Para disipar las dudas sobre el futuro papel del Ejército, Schneider declaró públicamente (mayo de 1970) que las fuerzas armadas estaban obligadas por el deber a garantizar una elección presidencial limpia y a apoyar a quien resultara electo; proposición que después fue apodada la «Doctrina Schneider».

El Tacnazo obligó a Alessandri a salir de su mutismo. Consciente de que Viaux era visto en los círculos derechistas como un posible «hombre con destino» (ilusión que el

¹⁷ Eugenio Lira Massi, *Ahora le toca al golpe*, 1969, pág. 73.

mismo Viaux no trató de corregir al hacerse propaganda), el ex presidente, entonces de 73 años, anunció su propia candidatura «independiente». Hacía caso omiso de su edad (vivió hasta los 90). La izquierda no tuvo más opción que unirse en torno a un candidato común. En octubre de 1969, se formó una nueva alianza de izquierda, que adoptó el nombre de Unidad Popular (UP) y que estaba constituida por socialistas, comunistas y radicales, y tres partidos menores: el MAPU, el nuevo Partido Social Demócrata (PSD) y la Acción Popular Independiente (API), dirigida por un antiguo ibañista, el senador Rafael Tarud. A mediados de diciembre, los partidos de la UP habían acordado una plataforma globalmente socialista. Elegir un candidato, sin embargo, resultó inesperadamente tortuoso. Salvador Allende era la opción más obvia, pero ya había perdido tres veces y siempre le había ido mal con las votantes, quizá por su reputación de mujeriego. Sus capacidades políticas, no obstante, eran reconocidas universalmente como excepcionales y, en enero de 1970, fue proclamado finalmente como el candidato presidencial de la UP.

El año de la elección estuvo marcado por una violencia menor: escaramuzas callejeras, ataques a las oficinas de los partidos, incluso algún esporádico atentado explosivo. Los tres candidatos hacían giras por el país promoviendo sus campañas para sumar partidarios y ganar votos. Conocido desde hacía tiempo como un poderoso orador, Tomic proclamó su proyecto de una «revolución nacional, popular y democrática», distanciándose de la propuesta de Frei en un claro intento por atraerse a los votantes de Allende. Allende, en forma mucho más calmada, explicó la «transición al socialismo» expuesta en el programa de la UP. Alessandri, aún más calmado, reiteró la evidente necesidad de ley y orden, y del fin de la demagogia. Por primera vez en Chile, la televisión jugó un papel claro en la lid. En las últimas semanas de la campaña, los chilenos, una vez más, se entregaron a los alegres rituales de las elecciones: marchas y reuniones políticas, discursos, afiches, eslóganes en los muros, canciones de campaña. La derecha publicó avisos en la prensa que mostraban tanques rusos fuera de La Moneda y trató de socavar el atractivo de Tomic con la consigna «Pero no es Frei». El periódico popular e indiscriminadamente populista *Clarín*, que apoyaba a Allende y a Tomic al mismo tiempo, atacó a Alessandri sin piedad, describiéndolo como «el candidato de los ricos» (lo que era bastante cierto) y alegando que era homosexual (lo que ciertamente no era).

Algunos observadores supuestamente bien informados (incluidos los de la Embajada de Estados Unidos) estaban convencidos de que Alessandri ganaría. Las tendencias electorales de los últimos años indicaban otra cosa. Tan sólo dieciocho meses antes, los partidos que ahora formaban la UP habían ganado más del 40% de los votos. En una contienda de tres miembros, esto le daba a Allende el margen que necesitaba. Sin embargo, cuando se anunció el resultado de la elección en las primeras horas del 5 de septiembre, quedó claro que apenas había logrado derrotar a su mayor contrincante, Alessandri. El margen fue de tan sólo 40.000 votos.

La elección de un marxista confeso (a pesar de que tenía un historial democrático impecable) creó inmediata intranquilidad. Las acciones en la Bolsa de Santiago se precipitaron; hubo un asedio a los bancos sin precedentes; los que no podían permitirse comprar oro compraron bienes de consumo en cantidad. Dado que ninguno de los tres candidatos había obtenido la mayoría absoluta, el Congreso tenía que ratificar la elección de Allende. El 9 de septiembre, Alessandri anunció que si el Congreso votaba por él en vez de por Allende, renunciaría inmediatamente, allanando así el camino para nuevas elecciones. El PDC, árbitro de la situación, no escuchó este canto de sirenas. Aceptó apoyar a Allende con la condición de que la UP firmara un «estatuto de garantías democráticas» —una estipulación algo ociosa de las libertades ya expuestas en la Constitución—. El hecho de que esto haya parecido necesario, como ha señalado Arturo Valenzuela, «muestra el deterioro de la confianza entre los líderes políticos que habían estado cerca durante décadas»¹⁸. Las propias actitudes conciliatorias de Allende disminuyeron la tensión durante esas difíciles semanas. Cuando algunos manifestantes se encaramaron a la estatua del general Baquedano en la plaza que lleva su nombre (8 de octubre), él y la UP apoyaron de inmediato las indignadas protestas del Ejército.

La derecha, sin embargo, estaba muy desilusionada con el fracaso del PDC ante la amenaza marxista. Un movimiento organizado rápidamente y bautizado «Patria y Libertad» realizó reuniones políticas y una o dos veces lanzaron panfletos sobre Santiago desde avionetas. Algunos impetuosos derechistas colocaron bombas, pero pronto fueron atrapados por la policía. Por su parte, el futuro «hombre con destino», el general Viaux, estaba tramando fomentar un golpe de estado para impedir que Allende asumiera el cargo. Otros generales (algunos de ellos en el servicio activo) también estaban conspirando, incentivados (e incluso abastecidos con armas) por la CIA norteamericana —una siniestra señal del trato que Allende podía esperar de la administración de Nixon, que ya se mostraba inquieta ante la perspectiva de una «segunda Cuba». La táctica de los conspiradores era secuestrar al despreciado constitucionalista, general Schneider, y obligar así al Ejército a entrar en acción. El grupo de Viaux se puso en marcha primero y estropeó el plan. Schneider se resistió al intento de secuestro y fue herido de muerte (22 de octubre). Falleció tres días después. Su sucesor, el comandante en jefe, general Prats, lo describió como un «héroe de la paz y un mártir de la democracia»¹⁹.

El asesinato estremeció a toda la nación. Nada comparable había ocurrido desde el asesinato de Portales en 1837. La opinión pública apoyó firmemente a Allende y la tradición democrática. La elección de Allende fue ratificada por el Congreso con 153 votos

¹⁸ *The Breakdown of Democratic Regimes. Chile*, Baltimore, 1978, pág. 49.

¹⁹ *Memorias. Testimonio de un soldado*, 2ª ed., 1985, pág. 188.

contra 35, el Partido Nacional seguía manteniendo su oposición *à outrance*. Cuando se leyó el resultado, quienes estaban escuchando la radio oyeron al diputado socialista Mario Palestro²⁰ dar un grito profundamente demótico: «¡Viva Chile, mierda!». Algunas personas se escandalizaron. La mayoría se rió.

²⁰ Recientemente se ha escrito de Palestro que su socialismo no era «el producto de un complicado proceso intelectual» (Eugenio Lira Massi, *La Cámara y los 147 a dieta*, Santiago, 1968, pág. 62). Él y sus hermanos eran caudillos políticos al viejo y pintoresco estilo. En esa época administraban la municipalidad de San Miguel (dotada con un fuerte componente de clase trabajadora y ubicada en el sector sur de Santiago) como un feudo. Su estilo fue eminentemente populista.

La vía chilena hacia el socialismo, 1970–1973

Como en las tragedias del teatro griego clásico, todos saben lo que va a ocurrir, todos dicen no querer que ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda la desgracia que pretende evitar.

Radomiro Tomic al general Carlos Prats, agosto de 1973

Nacido en una familia acomodada de Valparaíso, aunque no muy pudiente, Salvador Allende (62 años en 1970) originalmente había querido ser médico, como su abuelo, Ramón Allende Padín, político radical y líder de la masonería. El mismo Allende fue masón durante toda su vida. Mientras estudiaba medicina, se vio enfrentado directamente con la espantosa situación de la salud para los pobres. Aunque se graduó como médico, la política gradualmente reemplazó a la medicina como su verdadera vocación. Se hizo famoso en el bisoño Partido Socialista de la década de 1930, en 1937 fue elegido diputado por Valparaíso y, entre 1939 y 1942, estuvo al cargo del Ministerio de Salud. En 1945, obtuvo un puesto en el Senado y se mantuvo allí hasta que se convirtió en presidente. Era un político de tomo y lomo.

Desde el comienzo, el nuevo gobierno luchó denodadamente por llevar a cabo su programa político. Aumentó el gasto social considerablemente y realizó decididos esfuerzos por redistribuir la riqueza entre los peor pagados y los pobres. Como resultado de los mayores salarios y las nuevas iniciativas en salud y alimentación, muchos chilenos más pobres comían y se vestían mejor que antes. No obstante, el Estado no sólo luchó por mejorar su bienestar material: creó gran cantidad de iniciativas culturales, en un gran esfuerzo por llevar las artes a las masas. Uno de los muchos programas de este tipo, recordado por Joan, esposa de Víctor Jara, «llevó presentaciones regulares de ballet, música orquestal, folclore, teatro, poesía y mimos a los barrios marginales de la clase trabajadora de Santiago en una carpa de circo o en un gran escenario móvil al aire libre»¹. Ahora que los analfabetos y los mayores de dieciocho años podían votar, la postura pública del gobierno parecía favorecer una participación masiva más amplia en la toma de decisiones,

¹ Joan Jara, *Victor. An Unfinished Song*, Londres, 1983, pág. 164.

con mayor igualitarismo social en vez de las actitudes jerárquicas tradicionales. Ciertamente, el gobierno podía recurrir a las grandes reservas de idealismo de quienes lo apoyaban. Para muchos parecía como si los sueños de Bilbao y Arcos, para no mencionar los de Balmaceda, Recabarren y Aguirre Cerda, estuvieran finalmente a punto de convertirse en realidad en el mundo socialista que se avecinaba.

Gran parte de la tragedia que vino a continuación provino del hecho de que esa visión (que sin ninguna duda tenía un lado noble) nunca fue compartida por una clara mayoría de chilenos. La naturaleza radical del programa de la UP ciertamente iba a despertar la oposición por parte de los intereses establecidos. Tal como resultaron las cosas, no obstante, muchas de las dificultades a las que debió enfrentarse el presidente provinieron tanto de su propia coalición como de sus adversarios. Un factor crucial en este sentido fue que, mientras Allende y muchos de sus seguidores creían sinceramente que el socialismo podía construirse sobre las sólidas bases de la tradición democrática chilena, muchos de sus seguidores querían pasar por encima de esa tradición. Eran los herederos de la impetuosa radicalización de la década de 1960. Tal como ha señalado Hugo Cancino en un estudio muy detallado del periodo, «un sector amplio de la izquierda chilena [...] comenzó a mediados de los años 60, un proceso de extrañamiento de la realidad chilena, asumiendo las versiones más ortodoxas, canonizadas y formalizadas del marxismo leninismo»². No obstante —y Cancino también lo dijo sabiamente—, el Chile de 1970 no era la Rusia de 1917.

Esta contradicción entre los propios objetivos de Allende y las demandas radicales de los «ultras» que militaban en el interior (y al lado) de la coalición, provocarían muchos de los dilemas del gobierno de la UP. Los objetivos revolucionarios de los «ultras» eran utópicos y de largo alcance. Entre los más militantes había incluso quienes sostenían la creencia apocalíptica —tales creencias tienden a convertirse en profecías autocumplidas— de que, para el futuro de la izquierda y del socialismo, era *mejor* que Allende «cayera por un acto de fuerza», como algunos de ellos lo hicieron saber a un observador norteamericano en 1971: «estamos tratando de crear una situación de desorden y caos que obligue a los reaccionarios a dar un golpe de estado»³. Ésta es la razón de que, a pesar de su vasta experiencia política, su pericia parlamentaria y su atractiva personalidad, el presidente Allende nunca pareciera tener el control total de la situación después de su optimista primer año en el cargo —y puede señalarse que, durante su último año, estaba a punto de perder el control por completo—.

² Hugo Cancino, *Chile. La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo*, Aarhus, Dinamarca, 1988, pág. 439.

³ Norman Gall, «The Agrarian Revolt in Cautín, Part Two», *American Field Service Reports, West Coast South America Series*, 14, 5, Chile, pág. 15.

Dada la posición política global de Allende, quizá se podrían haber realizado esfuerzos para ampliar la base política de la UP tentando al PDC con una alianza y aislando así a la derecha obsecadamente hostil. En vez de ello, el gobierno siguió adelante impetuosa y firmemente con los programas que había anunciado (una reforma agraria acelerada, la nacionalización a gran escala) y que a la larga dejaron al PDC. Cuando se hizo evidente que Allende tenía que modificar estas políticas para sobrevivir políticamente, fue incapaz de hacerlo. Dentro de la coalición, los comunistas y los radicales estaban a favor de la moderación y del enfoque general del presidente. A diferencia de ellos, los propios socialistas de Allende (bajo el dominio de su revolucionario secretario general Carlos Altamirano), el MAPU y el MIR (fuera de la coalición) presionaban por sacar adelante su propio programa, obligando al presidente, a veces, contra su instintiva sabiduría política, a adherirse a las orientaciones políticas que llevaron al desastre final.

No obstante, no debemos anticiparnos. Durante la mayor parte de 1971, Allende y la UP mejoraron su posición política. En la oposición reinaba la confusión. El PDC no sabía muy bien qué hacer, pero ciertamente no deseaba colaborar con los detestados nacionales. En su primera gran prueba, la coalición de la UP ganó el 49,7% de los votos en las elecciones municipales de abril de 1971, casi dos puntos más que la oposición. Las elecciones municipales, sin embargo, aunque alentaron a la UP, no marcaron ninguna diferencia en su posición en el Congreso, donde la UP controlaba sólo el 30% del Senado y el 40% de la Cámara de Diputados.

Una posibilidad que se discutió en su momento fue que Allende llamara a un plebiscito con el fin de convocar una «asamblea del pueblo» que preparara el borrador de una nueva constitución —como estaba propuesto en el «Programa Básico» de la UP—. Dicho programa contemplaba una Presidencia más fuerte, un poder legislativo unicameral y elecciones simultáneas. Gracias a la inercia política producida por las elecciones municipales, la UP podría haber ganado tal plebiscito en 1971. Allende vaciló y al final decidió no seguir adelante. Evidentemente él mismo tendría tiempo después para reconocer que había sido un error estratégico.

En esos momentos, no obstante, la decisión no parecía demasiado importante. La victoria en las elecciones municipales, una oposición desunida y algunas cifras económicas muy positivas parecían indicar una creciente ola de popularidad para la «transición hacia el socialismo». El gobierno se atrevió a avanzar rápidamente con su programa económico.

¿HACIA UNA ECONOMÍA SOCIALISTA?

La nacionalización del cobre

Nacionalizando el cobre
dejaremos de ser pobres.

Así rezaba un eslogan del Partido Comunista de la cosecha de 1969-1970. En diciembre de 1970, Allende introdujo una enmienda constitucional para nacionalizar la Gran Minería (aprobada unánimemente por el Congreso en julio de 1971). El PDC ya no se oponía. La derecha apoyó la medida en parte porque aún se resentía de la defensa que los norteamericanos habían hecho de la reforma agraria en la década de 1960. Para la UP, el que la Gran Minería perteneciera a dueños extranjeros era «la causa básica de nuestro subdesarrollo [...], de nuestro magro crecimiento industrial, de nuestra primitiva agricultura, desempleo, bajos salarios, nuestro bajísimo estándar de vida, la alta tasa de mortalidad infantil y [...] nuestra pobreza y retraso»⁴. En palabras de Allende, el cobre era «el sueldo de Chile»: las enormes ganancias del cobre (mucho más de 120 millones de dólares al año) debían beneficiar ahora a la nación. «Con ese decreto», afirmó Luis Figueroa, dirigente de la CUT, «el presidente Allende ha hecho justicia a Chile y a su historia»⁵.

Allende anunció que las acciones de la Kennecott y la Anaconda serían compradas con bonos a 30 años (con intereses de, por lo menos, el 3%). Esta compensación se calculaba sumando el valor contable de los intereses financieros de las compañías, menos las deducciones por la amortización y la depreciación, a las «ganancias excesivas». Sólo Allende estaba habilitado para calcular las «ganancias excesivas» y, en septiembre de 1971, definió así cualquier beneficio que superara el 12% obtenido después de 1955. Como resultado de este cálculo, en vez de recibir una compensación, la Anaconda y la Kennecott debían pagarle al Estado 78 millones de dólares y 310 millones de dólares, respectivamente. Las compañías objetaron que sus beneficios no habían sido de ninguna manera tan sustanciales.

La nacionalización de las minas no trajo consigo el cuerno de la abundancia previsto: Tanto la producción como los beneficios disminuyeron drásticamente. Los allendistas afirmaron que los Estados Unidos estaban saboteando la producción al negar el acceso a la maquinaria y los repuestos norteamericanos. Y efectivamente se había vuelto difícil para las minas obtener repuestos, aunque a menudo era posible comprarlos a través de

⁴ *New York Times*, 25 de enero de 1971, citado en Eric Baklanoff, *The Expropriation of U. S. Investment in Cuba, Mexico and Chile*, Nueva York, 1975, pág. 96.

⁵ *Ercilla*, 6-12 de octubre de 1971, pág. 20.

terceros. El reemplazo de los técnicos de alto nivel (incluidos numerosos chilenos) que dejaron las minas tras la nacionalización resultó muy difícil. Algunos se fueron como una forma de protestar por las decisiones del gobierno; otros, porque ya no se les pagaba en dólares (una gratificación tradicional); otros, porque no podían adaptarse a la nueva gerencia. La partida de estos funcionarios especializados paralizó la producción, especialmente en áreas técnicas tales como la refinera.

En las mismas minas, las rencillas entre los sindicatos del PDC y aquellos controlados por los independientes, por una parte, y los funcionarios socialistas y comunistas, por otra, llevaron a huelgas no autorizadas por los sindicatos y a la ruptura de la disciplina de la fuerza de trabajo. Mientras tanto, la fuerza laboral había aumentado: en Chuquicamata en, aproximadamente, un 30%. Otro observador norteamericano señaló que muchos de los nuevos empleados eran «personal no cualificado, tales como sociólogos y psicólogos y hombres de relaciones públicas, que se habían dedicado al trabajo político por el bien de la Unidad Popular o por rivalidades infantiles entre ellos mismos»⁶. David Silberman, ingeniero en minas, comunista, que trabajaba en Chuquicamata, lamentaba que la afiliación política contara más que la formación a la hora de decidir muchas contrataciones, y concluyó que «los problemas en las minas son principalmente políticos y sociales»⁷. Entre 1967-1969 y 1973, el empleo en las minas aumentó en un 45%, mientras que la producción *per cápita* disminuyó al menos en un 20%.

El mismo presidente Allende se quejó de la deficiente disciplina. Quienes lo apoyaban desde la militancia con más fuerza consideraron que estos desajustes eran temporales, argumentando que «nuevas formas de ejercer la autoridad [...], y, en términos generales, el desarrollo de una nueva estructura de poder» estaban cambiando inevitablemente los «esquemas tradicionales a que estaban acostumbrados tanto los mineros como el personal técnico»⁸. Sin embargo, incluso los fieles tenían sus dudas. Según Joaquín Figueroa (anterior gerente general de la mina de cobre Andina), a mediados de 1972, las minas estaban «pagando menos que en los tiempos de los imperialistas yanquis»⁹.

Mientras los norteamericanos habían sido los dueños, la izquierda había apoyado consistentemente las peticiones de alzas en los salarios por parte de los mineros. Tras la nacionalización, el gobierno esperaba que se moderaran o que renunciaran a tales demandas. Los trabajadores no lo hicieron y los sindicalistas del PDC incentivaron el descontento para poner en aprietos al gobierno. Los mineros se declararon en huelga ochenta

⁶ Norman Gall, «Copper is the Wage of Chile», *Field Staff Reports, West Coast, South American Series*, 19, 3, 1972, pág. 7.

⁷ *Ibid.*, pág. 6.

⁸ Baklanoff, *Expropriation*, pág. 258.

⁹ «How Politicians Manage Mines», *Business Week*, 12 de agosto de 1972, pág. 46.

y cinco veces entre 1971 y 1972. La lucha más dramática por los salarios duró desde abril hasta julio de 1973, en El Teniente, y se extendió brevemente a Chuquicamata. Las palabras que el presidente Allende dirigió a los mineros no dieron resultado.

Los mineros recalcitrantes no eran de ninguna manera el único problema. Tanto la Kennecott como la Anaconda demandaron al gobierno en Europa y en los Estados Unidos, haciendo desistir a los compradores de cobre chileno. Dado que el gobierno de los Estados Unidos había avalado parte de los préstamos de la Kennecott, tenía intereses financieros para presionar a Chile en este asunto y lo hizo por medio de una restricción crediticia. Washington se opuso a las solicitudes de préstamos que Chile había presentado en el Banco de Desarrollo Interamericano y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. También disuadió a los bancos norteamericanos de otorgarle préstamos a Chile.

¿Podrían haberse evitado estos desagradables incidentes producidos por la nacionalización del cobre? El embajador de Estados Unidos en Chile, Edward Korry, trató de negociar una avenencia¹⁰. Korry quería que Allende dejara que la *U. S. Overseas Private Development Corporation* (OPIC) avalara los bonos del gobierno chileno, permitiendo así que las compañías cupríferas vendieran los bonos de inmediato, aunque fuera con un descuento. Allende consideró esta proposición seriamente, pero los ministros socialistas se opusieron. Sin embargo, aunque hubiera habido una avenencia y ninguna represalia norteamericana, no queda del todo claro que la nacionalización de la Gran Minería hubiera dado frutos inmediatos, puesto que, entre 1970 y 1973, el precio mundial del cobre cayó 35 centavos por libra. Mientras Allende era la víctima de un destino adverso en este ámbito, no puede negarse tampoco que la forma en que se llevó a cabo la nacionalización agravó los efectos de la simple mala suerte.

La aceleración de la reforma agraria

La ampliación de la reforma agraria resultó más controvertida y fue más polémica, en tanto que golpeaba más cerca del corazón del país. La UP no tenía una concepción única sobre la forma en que debía ser reorganizado el campo en el futuro. Los socialistas defendían la colectivización que se estaba llevando a cabo, viendo a los campesinos de los asentamientos como potenciales «kulaks reaccionarios». Los comunistas y los radicales estaban a favor de las cooperativas en que los campesinos podían trabajar sin perder el derecho a poseer parcelas privadas. En la práctica, todas estas discusiones produjeron un alto grado de confusión en el campo.

¹⁰ Negoció con éxito la nacionalización de la *Bethlehem Steel Company*, la *Northern Indiana Brass Company* y los *holdings* Río Blanco de Cerro Corporation.

El ritmo de la reforma agraria fue acelerado sustantivamente. Jacques Chonchol, entonces ministro de Agricultura, prometió que se expropiarían todas las propiedades de más de las ochenta hectáreas «básicas»¹¹. A finales de 1972, ya no había en Chile ningún predio que excediera ese límite básico. Los «ultras» de la UP y del MIR, que se oponían a que el ministro recurriera a la Ley de reforma del PDC, lenta y «burguesa», organizaron a los campesinos (y a los mapuches desposeídos) en un Movimiento Campesino Revolucionario, que se «tomó» más de 1.700 propiedades, muchas de ellas con una superficie inferior a ochenta hectáreas. Las tomas colocaron al presidente Allende en una difícil posición. Si Carabineros desalojaba a los campesinos, él mismo despejaba el camino para que lo acusaran de «traicionar al pueblo»; por otra parte, si toleraba las tomas, sus adversarios sin duda las utilizarían como una prueba de que la UP estaba burlando la ley. Para evitar este dilema, Allende recurrió a una provisión de la Ley de reforma poco conocida que permitía al gobierno expropiar una propiedad y nombrar a un interventor (administrador temporal) si algún obstáculo interrumpía el trabajo. El uso de esta medida aplacó a los «ultras», pero no logró suavizar demasiado el mal humor de la oposición.

Sólo los ex-inquilinos compartían la tierra de una hacienda expropiada; los «afuerinos» (alrededor del 60% de la fuerza de trabajo rural) no recibían nada. El ala radical de la UP presionó para que se confiscaran todas las propiedades y se crearan nuevas unidades agrícolas, las «haciendas del Estado», cultivadas por ex-inquilinos y por afuerinos sin distinción. Los campesinos de los «asentamientos» se opusieron enérgicamente a esta propuesta. El PDC les había prometido a ellos la tierra de sus patrones y, al parecer, ahora la UP quería quitárselas. El gobierno no podía ignorarlos: la sindicalización rural se había extendido demasiado. Impulsado por el PDC, los antiguos inquilinos insistieron de manera inflexible en mantener los «asentamientos». Chonchol se vio obligado a tolerar los que ya existían, pero se negó rotundamente a formar otros nuevos. En enero de 1971, con el fin de avanzar en sus propios planes, el gobierno creó el Consejo Nacional Campesino (CNC). Esta nueva organización funcional, compuesta por representantes de diversos grupos campesinos, relegaba cuidadosamente a los campesinos a un papel asesor más que a la toma de decisiones. La táctica falló, fundamentalmente porque los sindicatos de campesinos del PDC se opusieron con tenacidad al control del gobierno.

Para completar la reforma agraria, el gobierno fusionó los predios expropiados que eran limítrofes en nuevas entidades conocidas como Centros de Reforma Agraria (CERAs). Cada CERA tenía que darle al Estado el 90% de sus ganancias. El gobierno pagaba a sus miembros (tanto ex-inquilinos como afuerinos) un salario y comercializaba sus productos. Las leyes que regulaban los CERAs estaban redactadas de manera tan vaga que nadie sabía precisamente qué forma debían tomar las unidades. El CERA, de hecho, parece

¹¹ Ver capítulo 11, nota 11.

haber sido más bien un mecanismo para evadir la legislación de la reforma agraria existente y para promover la formación de una «sociedad sin clases en el campo»¹². No obstante, pronto surgieron muchas críticas que atacaban el CERA como un sistema que «simplemente transfería más prerrogativas de los derechos de propiedad a manos de los burócratas, mientras quitaba a la empresa individual o al grupo de campesinos el control sobre el superávit generado en el sector rural»¹³. A finales de septiembre de 1971 y nuevamente a comienzos de 1972, algunos miembros de los sindicatos agrarios opositores y otras organizaciones de campesinos exigieron que el Estado cumpliera la ley dividiendo los asentamientos en parcelas individuales. Incluso el CNC, el nuevo consejo de campesinos, se volvió ingobernable.

El gobierno también estableció Centros de Producción (CEPROs), unidades propiedad del Estado creadas para tratar con formas de agricultura «excepcionales»¹⁴. Sus trabajadores eran empleados del Estado que recibían un sueldo y los beneficios del seguro social. No obstante, más allá de que se las denominara asentamientos, CERAs o CEPROs, las nuevas unidades agrarias cambiaron la topografía rural de Chile. Los predios de ochenta hectáreas o más, que todavía en 1965 abarcaban el 55% de la tierra, ya no cubrían más del 3% en 1972. Poco más de la mitad de todas las propiedades rurales consistían ahora en parcelas con una superficie de entre cinco y ochenta hectáreas —comparadas con menos del 20% en 1965—. La hacienda tradicional (y todo lo que ella significaba) había desaparecido —y con sorprendente rapidez si consideramos la posición preponderante que históricamente había tenido—.

El campo reprodujo muchos de los problemas que en ese momento estaban afectando a las minas de cobre, donde las rivalidades políticas jugaban una vez más un papel que llenaba de confusión y donde los objetivos del gobierno estaban en conflicto con las aspiraciones de los campesinos (especialmente con las de los ex-inquilinos). Los campesinos temían que el Estado tomara el lugar de sus antiguos patrones. Como señaló Emilio Lorenzini, un democrata cristiano que trabajó mucho tiempo en el movimiento de reforma agraria:

No importa quién sea el dueño del capital, sino más bien quién tiene el poder de decidir, de obtener los frutos de la empresa y de orientar la producción nacional. No conseguiremos nada si sólo cambiamos el grupo que explota a los trabajadores en el sistema capitalista por [...] un interventor designado por los burócratas [...] Los trabajadores le seguirán vendiendo su trabajo a quienes controlan el capital [...] Antes eran accionistas; ahora son burócratas¹⁵.

¹² Brian Loveman, *Struggle in the Countryside*, Bloomington, Indiana, 1976, pág. 293.

¹³ *Ibid.*, pág. 295.

¹⁴ Stefan de Vylder, *Allende's Chile*, Cambridge, 1975, pág. 188.

¹⁵ *La Prensa*, 26 de noviembre de 1971, citado en Loveman, *Struggle in the Countryside*, págs. 298-299.

La combinación de agitación rural, erosión de la disciplina campesina y condiciones climáticas adversas hizo decaer la producción agrícola. Entre 1969-1970 y 1972-1973, la superficie de tierra cultivada disminuyó en, aproximadamente, un 20%. Las cosechas de algunos cultivos se redujeron considerablemente: el trigo en más del 30%, las patatas en más del 15%, el arroz en un 20%, el azúcar de remolacha en un 40%, aunque otros cultivos (avena, maíz, cebada) tuvieron mucho mejor rendimiento. Algo similar ocurría con el ganado. Si bien ahora había menos vacas y ovejas, sí había más cerdos y gallinas. En general, no obstante, estas condiciones anormales produjeron incertidumbre. El temor a sufrir una toma o a ser expropiados aterró de tal manera a algunos agricultores privados, que simplemente se negaron a plantar, liquidaron su maquinaria y sacrificaron su ganado o bien mandaron sus animales al otro lado de la cordillera, a Argentina. Los campesinos del «sector reformado» se mostraron casi tan recalcitrantes como los agricultores, poniendo sus mejores esfuerzos en el cultivo de sus propias parcelas (para su propio consumo o la venta de los productos en el floreciente mercado negro) más que en el trabajo de la tierra de propiedad común.

Todo esto ya era bastante malo, pero las dificultades todavía iban a aumentar debido a otras políticas. Una congelación de los precios combinado con aumentos en los salarios hizo subir desmedidamente el consumo de alimentos interno. Para satisfacer la demanda, el gobierno se vio obligado a importar más alimentos. En 1972, estaba gastando el 56% de los ingresos por concepto de exportaciones.

La nacionalización de la industria

La UP tenía la intención de nacionalizar los elementos más significativos de la base industrial del país. El Estado chileno ya poseía o controlaba la industria del acero, los campos petrolíferos y las refinerías, la mayoría de los ferrocarriles, la línea aérea nacional, etc. A través de la CORFO, el Estado también era dueño parcial de varias compañías manufactureras importantes, que en 1970 controlaban alrededor del 40% de la producción nacional. Sin embargo, el gobierno de la UP siguió empeñado en erradicar *todas* las grandes corporaciones privadas —que calificaba como «los monopolios»—.

El «Programa Básico» de la UP contemplaba una economía con tres sectores diferenciados: (1) el Área de la Propiedad Social, más brevemente el «Área Social» (compañías propiedad del Estado); (2) el «Área Mixta» (firmas en las que el Estado era el principal accionista); y (3) el «Área Privada» (pequeños negocios). Los comunistas y los radicales sugirieron que sólo fueran consideradas en el programa aquellas empresas que ejercieran un «poder de monopolio» —un camino que podía ganar el apoyo político de la clase media—. Los socialistas y el MAPU (sin mencionar el MIR) deseaban la nacionalización

inmediata de, virtualmente, todos los medios de producción. Una vez más, Allende tuvo que enfrentarse a una pugna difícil.

En octubre de 1971, el presidente propuso que se transfirieran a las Áreas Social o Mixta todas las compañías cuyo activo neto excediera los 14 millones de escudos (alrededor de 1 millón de dólares). Había unas 253 corporaciones de tales características (150 de ellas eran empresas manufactureras) y que controlaban alrededor del 90% de todos los haberes de la corporación. El gobierno aceptó comprar estas compañías mediante bonos con intereses equivalentes al valor contable de su activo de 1969. Los inversores menores recibirían un reajuste por la inflación. Los mayores accionistas obtendrían un trato menos favorable. En el Congreso, la mayoría se opuso a este plan temiendo que fuera usado para controlar los medios de comunicación¹⁶. En enero de 1972, las compañías consideradas para la expropiación fueron reducidas a noventa; lo cual no aplacó a la oposición.

El gobierno descubrió una manera de soslayar al Congreso. La República Socialista de 1932 había emitido un decreto (DFL 520) que permitía la expropiación de cualquier empresa industrial considerada «esencial» para la economía si ésta infringía la Ley. Cualquier infracción menor podría ser interpretada fácilmente bajo esta luz. El DFL 520 había permanecido en la penumbra hasta que fue descubierto repentinamente por un abogado de la UP. Entonces, este edicto olvidado pasó a ser uno de los instrumentos más poderosos de La Moneda, el más importante de los llamados «resquicios legales» que despertaron la ira de la oposición. Una segunda medida de este tipo, puesta en vigor durante el Frente Popular, permitió que el Estado requisara las fábricas administradas de manera ineficiente, aunque sin transferir su propiedad formalmente al Estado. Gracias a estas dos medidas, el Estado pudo instalar interventores en las fábricas correspondientes.

Aunque no en todos los casos fue necesario recurrir a este tipo de subterfugios. El gobierno no tuvo demasiadas dificultades para adquirir las acciones de los principales bancos. Como era bastante predecible, las empresas norteamericanas se convirtieron en el blanco favorito para la nacionalización: Ford, ITT (la última con justa razón, dado su grotesco comportamiento durante la elección de Allende)¹⁷ y *Ralston Purina* pasaron a formar parte rápidamente del Área Social. En 1973, gracias a una combinación de requisas,

¹⁶ Una cuestión particularmente polémica en este marco fue el intento del gobierno de comprar el 51% del *holding* de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (conocida localmente como la «Papelera»), la principal fuente de papel de prensa del país y una compañía dirigida por el ex presidente Jorge Alessandri. Los accionistas se negaron a la adquisición y se produjo un prolongado forcejeo, en el que el gobierno trató de extorsionar a la compañía congelando el precio del papel.

¹⁷ Tanto antes como después de septiembre de 1970, la ITT ofreció dinero a la CIA para impedir la elección y la toma de posesión del mando de Allende, un ejemplo de la «subversión corporativa» que despertó intensa indignación en Chile, no sólo en la izquierda.

tomas y compras de acciones, el Estado controlaba el 80% de la producción industrial del país, más de 400 empresas y alrededor del 60% del PNB¹⁸.

No obstante, las fábricas nacionalizadas o «intervenidas» sufrieron las mismas dificultades que entonces afectaban a la minería y la agricultura. Los interventores solían ser elegidos no tanto por sus calificaciones técnicas como por su influencia en los partidos de la coalición; los socialistas y los comunistas recibían los mejores cargos. Además, la política de empleo del gobierno a menudo infló las nóminas de salarios de las fábricas. A medida que la disciplina se fue relajando aumentaron las dificultades: «corrupción; robo; absentismo; costoso descuido en el uso de la maquinaria, incluida negligencia en la mantención; simplemente el no trabajar; llevar a cabo venganzas (en parte basadas en lealtades políticas)»¹⁹. Las huelgas se hicieron más frecuentes, a veces incentivadas por la oposición. En 1970 y 1972 las suspensiones del trabajo casi se duplicaron, lo que costó al país 162 millones de días laborales perdidos.

No obstante, aún llevó algún tiempo antes de que las implicaciones de la rápida nacionalización quedaran en evidencia. De hecho, 1971 fue un año de opulencia: con la congelación de los precios y la subida de los salarios, el poder adquisitivo aumentó sustancialmente. El PNB se disparó en un 8,3%; la producción industrial aumentó en un 12,1%; el desempleo se redujo en un 3,8%. Estas prometedoras cifras habían sido alcanzadas porque las fábricas pudieron explotar las existencias almacenadas, los suministros de materias primas acumulados y una capacidad industrial en desuso de casi el 25%. Los buenos tiempos, desgraciadamente, no podían durar. El prolongado congelamiento de los precios hizo que, para las compañías, ya no fuera provechoso producir. A la espera de la expropiación, los dueños de las fábricas privadas se negaron a invertir. La producción industrial lentamente comenzó a bajar. A mediados de 1972, la producción todavía se mantenía levemente por encima de las cifras de 1971; durante los últimos meses del año, la caída se volvió penosamente evidente y el Área Social comenzó a endeudarse cada vez más. En 1972, el déficit llegaba a aproximadamente 22.000 millones de escudos (equivalente al 60% de los ingresos nacionales). Según palabras de Stefan de Vylder: «el Área Social se convirtió en un balde con un agujero, que echaba carbón al volumen de circulante y a la galopante tasa inflacionaria»²⁰.

En muchos sentidos, el proceso de nacionalización quedó fuera de control. En abril de 1971, los trabajadores de la planta textil Yarur tomaron la fábrica y exigieron que fuera incorporada al Área Social. Ésta era la primera vez que los trabajadores, antes que el

¹⁸ Alberto Baltra, *La gestión económica del Gobierno de la Unidad Popular*, 1973, págs. 53-54.

¹⁹ Henry Landsberger y Tim McDaniel, «Hypermobilization in Chile, 1970-1973», *World Politics*, 28, 4, 1976, pág. 529.

²⁰ De Vylder, *Allende's Chile*, pág. 154.

gobierno, tomaban una fábrica. El ejemplo fue imitado con presteza. En junio de 1972, los trabajadores de la planta enlatadora Perlak en Los Cerrillos también exigieron que fuera incluida en el Área Social. Perlak, junto con otras dos fábricas vecinas, crearon el Cordón Cerrillos, el primero de los llamados «cordones industriales» —áreas controladas por los trabajadores, efectivamente independientes del gobierno—. Una vez más, Allende debió afrontar una elección penosa. ¿Aceptaría las acciones de los trabajadores o devolvería las fábricas ocupadas a sus dueños? Cuando La Moneda optó por lo primero, los militantes socialistas y miristas tomaron otras fábricas más, exigiendo que los trabajadores ejercieran el control. Parece evidente que la capacidad del gobierno para conducir la nacionalización a su propio ritmo se vio seriamente obstaculizada.

A medida que la producción industrial (y agrícola) decaía, Allende se vio obligado a comprar productos importados para cumplir su promesa de llegar a un nivel de vida más alto. Sin embargo, la bajada del precio del cobre redujo la capacidad del país para recaudar reservas extranjeras y, por ende, su capacidad para pagar las importaciones. Reacio a reducir el nivel de vida, pero enfrentado a una crisis económica creciente, Allende se dio cuenta de que no tenía los medios para lograr los cambios que él defendía. Una planificación seria a largo plazo quizá habría señalado que el gobierno tenía que usar sus menguadas reservas para comprar materias primas y repuestos esenciales. Al final, los cálculos políticos triunfaron sobre el buen criterio económico. Allende optó por los bienes de consumo (incluidos los alimentos) antes que por los bienes de capital. A fines de 1972, la balanza comercial del país estaba absolutamente desequilibrada: las exportaciones habían disminuido en un 25% desde 1970, mientras que las importaciones habían aumentado en un 40%. El déficit comercial aumentó de 18 millones de dólares a 255 millones de dólares en 1971-1972.

El fracaso de la estrategia económica de la UP

Una clave sobre la estrategia general de la UP para mejorar la fortuna de los peor pagados y los más necesitados —una estrategia «keynesiana», como se la describió a menudo en la época— era darles empleo ya fuera en las nuevas empresas nacionalizadas o en los proyectos de obras públicas. Tan sólo en 1971, por ejemplo, los fondos para las obras públicas aumentaron de 19 millones a 33.000 millones de escudos. Esto también debía estimular la economía produciendo un mayor consumo. Allende prometió proteger al consumidor de la inflación «reajustando» los salarios. Durante el primer año de su mandato, los salarios aumentaron en un 55% (mucho más que la inflación del año anterior, de un 33%, y muy por encima de las directrices iniciales del gobierno). Los obreros recibieron mayores aumentos para disminuir la brecha entre ellos y los empleados que, hasta

entonces, habían sido los más mimados. La Moneda también elevó sustancialmente los gastos sociales (salud, vivienda y educación), al igual que el acceso público al sistema de seguridad social, entregando mayores beneficios fiscales así como mejores asignaciones familiares.

Las implicaciones inflacionarias de tales políticas no fueron consideradas por los funcionarios del gobierno, quienes argumentaron que los controles de precios podían ponerle una cota a la inflación hasta que la producción fuera igual a la demanda. De hecho, cuando el coste de la vida aumentó sólo el 22% en 1971, el enfoque económico de la UP pareció lógico. Este discreto aumento, sin embargo, ocultaba una presión inflacionaria soterrada. Los negocios (privados o públicos) florecieron en 1971 mediante una reducción de sus provisiones de materias primas y existencias. En 1972, los productores se vieron obligados a adquirir las reposiciones y las materias primas a precios mucho más altos. La Moneda usó sus sustanciales reservas de divisas con el fin de subsidiar las importaciones para el consumidor. Sin embargo, con la baja de las exportaciones, dichas reservas menguaron en un 90%. A la larga, al gobierno le resultó imposible continuar suscribiendo la economía del consumidor.

Además habían comenzado a aparecer otras siniestras estadísticas: durante 1971, el volumen de circulante se duplicó y la cantidad de créditos disponibles tanto para el sector privado como para el sector público se triplicó. Los ingresos por concepto de impuestos también bajaron. Para cubrir el déficit y conseguir fondos para los bienes de consumo y de capital, el gobierno pidió préstamos extranjeros. Sabía que no obtendría buenos resultados en Washington: como ya se señaló, el gobierno de Estados Unidos estaba utilizando su poder para vetar las solicitudes chilenas a los bancos internacionales. La reducción del crédito norteamericano empeoró sin duda las dificultades económicas de Chile; en el caso de que Estados Unidos se hubiera adherido a un «bloqueo invisible», cuya existencia se solía alegar, la eficacia de esta medida puede ser cuestionada. Como señalaría luego Clodomiro Almeyda, el leal ministro de Relaciones Exteriores de Allende, «Chile había logrado a mediados de 1973 disponer en [Europa Occidental] de líneas de crédito bancarias normales, que le permitían adquirir allí muchas de las mercancías que ya no podía comprar en Estados Unidos»²¹. Los préstamos y los créditos de China, del bloque soviético y de algunos países de América Latina alcanzaron la suma aproximada de 750 millones de dólares; cuánto fue girado realmente es otro tema.

Las presiones inflacionarias simplemente se hicieron demasiado fuertes. Las menguantes provisiones de bienes de fabricación local junto con la aparición de un fuerte mercado negro impusieron un alza inexorable de los precios. En realidad, tampoco se realizó ningún esfuerzo serio para imponer el racionamiento. En un intento cada vez más

²¹ Citado en Joaquín Fernandois, *Chile y el mundo, 1970-1973*, 1985, pág. 395.

desesperado por mantener los niveles salariales, el gobierno continuó «reajustando». Tales medidas elevaron las proyecciones inflacionarias. Entre julio de 1971 y julio de 1972, el coste de la vida aumentó en un 45,9%. La inflación se duplicó en agosto de 1972 y subió la mitad de eso una vez más en septiembre (en las mismas seis semanas, el escudo cayó en picado de 150 a 300 por dólar en el mercado negro). Al año siguiente, la inflación aumentó en más de un 300%. Muchas personas se lanzaron a adquirir desenfrenadamente bienes de consumo como una medida contra la inflación futura o para protegerse contra la escasez que se había vuelto demasiado común a fines del tercer año del mandato de Allende.

A mediados de 1973, la economía estaba a punto de hundirse. Después, muchos atribuirían esta debacle económica a la hostilidad de las clases media y alta, y a Estados Unidos —cuyo ataque fue real y fuerte—. Sin embargo, las principales decisiones económicas no fueron tomadas por la oposición. La situación económica de los años de la UP puede ser reinterpretada con razón, quizá, como una instancia clásica de «primacía de la política». Pedro Vuskovic, ministro de Economía de Allende (1970-1972), lo admitió: «La política económica está subordinada, en sus contenidos, aspecto y forma», afirmó en marzo de 1972, «a las necesidades políticas del creciente apoyo a la Unidad Popular [...]»; un objetivo central es ampliar el apoyo al gobierno»²². Este objetivo central, simplemente, no se alcanzó.

CONFRONTACIÓN Y PARALIZACIÓN

El deterioro de la atmósfera política reflejaba (y de alguna manera anticipaba) el empeoramiento de la situación económica. En junio de 1971, un grupo extremista, el VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo), asesinó al antiguo ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic. Los terroristas eran hombres a quienes Allende había concedido una amnistía muy polémica cuando asumió la Presidencia y el PDC estaba furioso. Exigió al presidente que controlara y desarmara a los diversos grupos paramilitares «ultra», tales como el VOP y el MIR, cuyas actividades sospechaba que eran toleradas por Allende. Si bien el gobierno rápidamente aplastó al VOP, hizo poco por frenar al MIR. Los efectos electorales del asesinato se dejaron sentir en julio en una elección complementaria en Valparaíso, donde el Partido Nacional aceptó apoyar al candidato del PDC, el Dr. Óscar Marín. El PDC negó que hubiera una alianza formal, pero aceptó el apoyo del ala derecha, solicitando el apoyo en las urnas de todos quienes «repudiaran la violencia y el odio, el

²² Pedro Vuskovic, «The Economic Policy of Popular Unity Government», en J. Ann Zammit (ed.), *The Chilean Road to Socialism*, Austin, Texas, 1973, pág. 50.

sectarismo y los grupos armados ilegales»²³. La escasa victoria del Dr. Marín marcó un límite y colocó a la UP a la defensiva en términos políticos.

Las posiciones políticas se habían endurecido. El PDC se arrogaba el oponerse a cualquier intento por convertir a Chile en una «sociedad totalitaria», y de introducir una legislación que protegiera a los pequeños comerciantes y a los terratenientes, exigiendo que el Congreso aprobara cualquier ampliación del Área Social. Algunos miembros del ala izquierda del PDC rompieron filas en este punto y formaron la nueva Izquierda Cristiana, que se unió inmediatamente a la coalición de la UP. La misma UP también sufrió la defeción de un grupo de radicales, inquietos por la creciente influencia marxista en su partido, y crearon el Partido de Izquierda Radical.

Para el PDC, los meses de mediados de 1971 fueron algo así como el momento de la verdad. La lógica de la competencia tradicional entre los partidos lo obligó, poco menos, a adoptar una postura de oposición. En octubre de 1971, sus diputados introdujeron formalmente la legislación que exigía la aprobación del Congreso para que se pudieran ampliar las Áreas Social o Mixta. También querían restringir el uso del DFL 520, limitando las requisiciones de propiedad a un periodo de seis meses y permitiendo que los dueños de las propiedades pudieran apelar ante la Corte Suprema.

La resistencia a la UP tanto dentro como fuera del Congreso fue aumentando gradualmente. Durante una prolongada visita a Chile del primer ministro de Cuba, Fidel Castro, las amas de casa de las clases media y alta realizaron su famosa «Marcha de las Cacerolas Vacías» (1 de diciembre de 1971), desfilando por las calles de Santiago y golpeando las cacerolas para denunciar las escasez de alimentos y la inflación. Quienes apoyaban a la UP atacaron a las manifestantes, incidente que llevó a la oposición a presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, José Tohá. Antes de que la acusación llegara al Senado, Allende transfirió a Tohá al Ministerio de Defensa —acto que la oposición vio como un calculado desaire al Congreso—. Esto afianzó aún más la alianza informal entre el PDC y los nacionales. En enero de 1972, se realizaron dos elecciones: en O'Higgins-Colchagua para el Senado y en Linares para la Cámara de Diputados. Tanto el gobierno como la oposición se arrojaron con todas sus fuerzas a la lucha. La UP perdió ambas batallas.

Claramente preocupado por el creciente deterioro de la situación política, el presidente Allende convocó a una reunión de los dirigentes de la coalición en El Arrayán (febrero de 1972). La asamblea mostró ampliamente las divisiones que asolaban a la UP. Los comunistas y los radicales (y los propios seguidores personales de Allende entre los socialistas) predicaban la moderación; algunos sugerían incluso un «diálogo» con el PDC. La mayoría de los socialistas y el MAPU respondían exigiendo que el gobierno «acelerara

²³ Paul Sigmund, *The Overthrow of Allende*, Pittsburgh, 1977, pág. 149.

el proceso revolucionario». La reunión de El Arrayán subrayó el dilema fundamental de Allende. Y, además de tener que luchar con sus supuestos amigos, el presidente nuevamente tuvo que batallar con sus adversarios *reales*, cuyos ataques al gobierno se estaban volviendo cada vez más feroces. En abril de 1972, el PDC ganó el estratégico Rectorado de la Universidad de Chile. En julio, el Partido alegó estrepitosamente que la UP había manipulado fraudulentamente las recientes elecciones en la CUT y el Congreso logró sus objetivos al procesar a Hernán del Canto, ministro del Interior, por permitir el contrabando de armas a Chile a bordo de un avión cubano. Aunque la UP ganó las elecciones complementarias en Coquimbo (también en julio de 1972), sus resultados fueron muy poco brillantes.

Gran parte de la discusión política de la primera mitad de 1972 se centró en un espinoso tema constitucional. En febrero de 1972, el Congreso aprobó una enmienda constitucional impulsada por el PDC que prohibía las expropiaciones no autorizadas por el poder legislativo. Allende vetó la propuesta y una mayoría del poder legislativo respondió votando para revocar el veto, acción que amenazaba con hundir a la nación en una clásica crisis institucional. Allende alegó que el Congreso sólo podía revocar su veto con una mayoría de dos tercios y no con una mayoría simple, como alegaban los parlamentarios. Esta diferencia de interpretaciones se suscitó a raíz de la enmienda constitucional de enero de 1970, la cual, al establecer un mecanismo para los plebiscitos en casos de enmiendas constitucionales en disputa, había empañado esta cuestión en particular. Las discusiones se sucedían; la oposición presionaba en favor de un plebiscito; Allende insistía en que era necesaria una mayoría de dos tercios (al igual que para revocar su veto en la legislación normal) y que el asunto sólo podía ser resuelto por el Tribunal Constitucional creado por la enmienda de 1970. Por el momento, la situación quedaría sin resolver.

No obstante, la presión parlamentaria siguió aumentando. En junio de 1972, el PDC introdujo una nueva enmienda constitucional que prohibía la expropiación de los predios de menos de cuarenta hectáreas y que exigía que el gobierno (de acuerdo con la Ley de 1967) convirtiera los «asentamientos» en cooperativas o unidades agrícolas de explotación individual. Una vez más, los políticos estaban inmersos en la discusión de ciertos asuntos constitucionales, por lo cual el creciente conflicto entre el gobierno y la oposición llegaba ahora cada vez con mayor frecuencia a las calles: las demostraciones se habían vuelto más y más violentas, obligando a Allende a decretar el estado de emergencia en Santiago y en Concepción en agosto y septiembre de 1972. Muchos sospecharon que los «ultras», tanto de la izquierda como de la derecha, estaban convirtiendo a Chile en un campo armado. Ante el estado de ánimo generalizado, el Congreso legisló para restringir la tenencia de armas automáticas sólo a las fuerzas armadas y a Carabineros, y también otorgó a los militares el poder para registrar (y confiscar) armas de fuego encontradas en manos de civiles. Esta nueva Ley de control de armas, debidamente firmada por Allende, entró en vigor en octubre de 1972.

En ese mismo mes, enfurecidos por los planes que había en el sentido de crear una empresa de transportes del Estado, un grupo de camioneros inició una huelga en la sureña provincia de Aysén y, con ello, provocó la primera gran crisis de los años de la UP. El encarcelamiento de los dirigentes de la huelga precipitó una repentina y extendida ola de paros de trabajadores. Otros grupos, especialmente los tenderos y los dueños de pequeños negocios, se sumaron a la huelga solidarizándose con los primeros y agrupándose en gremios para defender sus intereses. Bajo una organización funcional, el Frente Nacional de Defensa (después conocido como el Comando Nacional de Defensa), apoyó con todas sus fuerzas a los camioneros. Se produjo así una movilización masiva a la cual se sumaron a la larga entre 600.000 y 700.000 personas, incluidos campesinos, marinos mercantes, doctores, abogados y otros profesionales. En el momento más álgido del paro, había más de 23.000 camiones en la carretera. Dada su función vital en el transporte de bienes, el país se encontró de pronto prácticamente paralizado.

La movilización opositora estuvo acompañada por la de los radicales de la UP, quienes respondieron tomando las fábricas cerradas por sus propietarios —como una manera de solidarizarse con los huelguistas—, incorporándolas a los «cordones industriales» ya existentes y creando otros nuevos. Ahora, los «cordones» establecían «comandos comunales» para encargarse de los aspectos económicos durante las huelgas. Estas organizaciones «paralelas» (y, en cierta medida, paramilitares) se volvieron cada vez más poderosas —a mediados de 1973 había una media docena de ellos en torno a Santiago—. Esto planteaba un angustioso dilema para el presidente Allende: ¿debía desalojar a los ocupantes?, ¿debía apoyarlos? Fuera cual fuera la decisión, en ambos casos perdía.

Ansioso por restaurar el orden a tiempo para las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, el presidente intentó desesperadamente mitigar la monumental crisis nacional. Con ese fin, invitó al general Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército, a ocupar el cargo de ministro del Interior, al tiempo que ofrecía otras dos carteras a oficiales (2 de noviembre de 1972). Prats, masón como Allende, rápidamente se consolidó como una figura clave en una escena política cada vez más enfrentada. Rápidamente disolvió la huelga de los camioneros (noviembre de 1972), permitiendo así que se realizara la campaña para las elecciones parlamentarias en una atmósfera algo más tranquila. La importancia de esta elección era evidente. Si la oposición PDC-Nacional (ahora aliados formalmente en la «Confederación Democrática») obtenía una mayoría de dos tercios, esto le permitiría revocar los vetos presidenciales y poner en tela de juicio al presidente.

Dada la inflación, la escasez de alimentos, las largas colas de espera en las tiendas y el floreciente mercado negro, muchos observadores externos asumieron que la UP perdería estrepitosamente. Sin embargo, los allendistas siguieron siendo leales, aunque con cierta ironía —como rezaba un eslogan mural de la época—: «Es un gobierno de mierda, pero es el nuestro». La UP ganó el 44% de los votos, la oposición el 55%. En términos de

partidos, el PDC (29%) y los nacionales (21%) derrotaron a los socialistas (19%) y a los comunistas (16%). Esto tenía poca importancia: Allende estaba a salvo de la acusación constitucional. Las elecciones de 1973 suscitaron gran cantidad de hostiles acusaciones y contraacusaciones de fraude electoral (por ejemplo, haber colocado votos en las urnas) y de una excesiva demora en anunciar los resultados —testimonio elocuente de la atmósfera de desconfianza que se había instalado para entonces entre el gobierno y la oposición—.

QUIEBRA Y TRAGEDIA

Quizá envalentonado por sus logros electorales, el gobierno procedió a introducir una nueva reforma educacional, la llamada Escuela Nacional Unificada (ENU). Esta medida, cuyo fin era entregar un mejor acceso a la educación, estaba concebida también para promover al «hombre nuevo», «libre para desarrollarse a cabalidad en una sociedad no capitalista y que se expresaría como una personalidad [...] consciente y solidaria con el proceso revolucionario, que sería capaz [...] de desarrollar técnica y científicamente la sociedad económica en su transición al socialismo»²⁴. Esto se lograría combinando los «valores chilenos tradicionales» con el reconocimiento de «las luchas proletarias en pro de la soberanía y la independencia que prácticamente han sido ignoradas por la enseñanza tradicional, que sirve a los intereses de clase de la oligarquía»²⁵.

La ENU logró sumar a la oposición a los grupos que hasta entonces se habían mantenido neutrales. Los obispos católicos se habían mostrado bastante tolerantes con el gobierno, pero ahora criticaban a la ENU por ignorar los «valores cristianos» y por usurpar el papel de los padres en la educación. La Iglesia pidió al gobierno que postergara el plan hasta que fuera debatido con más detalle. El clero no era el único que se oponía. Los padres de los niños en colegios privados también manifestaban sus objeciones. La ENU provocó demostraciones estudiantiles tanto a favor como en contra del proyecto; en una de ellas, un francotirador mató a un manifestante. Los políticos se sumaron al clamor: el PDC señaló que la medida era estrecha de miras y estaba mal concebida; los nacionales la describieron con más sensacionalismo como «lavado de cerebros». La izquierda denunció esta actitud como típica de una «ideología retrógrada y clasista, el egoísmo de este grupo privilegiado, su miopía intelectual y su defensa tan cerrada de los intereses de casta»²⁶.

Enfrentados a estas reacciones hostiles, Allende y su ministro de Educación, el radical Jorge Tapia, acordaron en abril de 1973 postergar la entrada en vigor de la ENU. No

²⁴ Joseph P. Farrell, *The National Unified School in Allende's Chile*, Vancouver, 1986, pág. 96.

²⁵ *Ibid.*, pág. 97.

²⁶ *La Nación*, 25 de abril de 1973, citado en Farrell, *The National Unified School*, pág. 222.



obstante, mientras Tapia se encontraba en el extranjero, uno de sus subordinados, Carlos Moreno, anunció que el gobierno seguiría adelante con una parte de la legislación. Esto encolerizó a la oposición, mientras Tapia, furioso ante este sabotaje por parte de uno de sus ayudantes, presentó la renuncia, que Allende rechazó. A muchos, este episodio les pareció una prueba más de que el gobierno apenas podía controlar a sus propios funcionarios.

Sin embargo, la ENU no fue la única situación que tocó las susceptibilidades políticas. Poco después de las elecciones, La Moneda anunció que expropiaría (contrariamente a lo que estipulaba la Ley de reforma agraria) los predios que tuvieran una superficie de entre cuarenta y ochenta hectáreas. El gobierno también continuó nacionalizando las fábricas. El PDC respondió reviviendo un tema constitucional que había quedado pendiente en 1972, con la esperanza de conseguir una enmienda que limitara el Área Social. Mientras el Congreso y el presidente se enredaban una vez más en sus discusiones constitucionales, el país parecía atascarse en una parálisis creciente. Los trabajadores seguían ocupando las fábricas, extendiendo los cordones industriales. Los grupos paramilitares tanto de derecha como de izquierda se preparaban para la lucha armada que sus corazones anhelaban. Las manifestaciones callejeras se intensificaban. La retórica en ambos bandos se iba haciendo más y más estridente, al igual que la prensa, que a menudo recurría a un lenguaje soez y degradante (un periódico de izquierda describió lisa y llanamente a los jueces de la Corte Suprema como «viejos de mierda»). En los muros, proliferaban los eslóganes. Los de la izquierda amenazaban a todos los «momios» con el pelotón de fusilamiento. Los de la derecha le exigían quejumbrosamente a las fuerzas armadas que intervinieran. En algunos muros se escribía una sola palabra amenazadora: *Jakarta* —clara alusión a la masacre de Indonesia donde los militares habían matado a 300.000 comunistas ocho años antes—.

En esta atmósfera, los militares comenzaron a aproximarse al centro del escenario. Muchos oficiales se sentían agraviados ahora por el gobierno que antes habían jurado proteger, especialmente cuando los civiles anti-Allende habían insultado al cuerpo de oficiales, sembrando dudas sobre su inteligencia (y, por lo general, sobre su virilidad). Mientras tanto, la izquierda le echaba leña al fuego denunciando a los oficiales, exhortando a los reclutas para que se amotinaran y haciendo una llamada a las milicias de los trabajadores para que reemplazaran a las fuerzas armadas profesionales. Ambos bandos estaban con los nervios de punta. En un incidente famoso (27 de junio de 1973), el general Prats obligó a una mujer a desviar su auto hasta la acera, después de que ella le hubiera sacado la lengua. Si una muchedumbre hostil no hubiera intervenido, él la habría arrestado.

El creciente descontento militar se hizo evidente el 29 de junio de 1973, cuando el Segundo Regimiento Blindado se rebeló. En cierto sentido, el levantamiento fue cómico. La dotación de un tanque se detuvo a echar combustible en una gasolinera (le pagaron al dependiente) y los tanques obedecieron escrupulosamente los semáforos en su camino

a derrocar al gobierno. No obstante, la guardia presidencial de Carabineros se mantuvo firme. El general Prats, yendo de un tanque a otro armado con una ametralladora, ordenó a los amotinados que se rindieran. Lo hicieron. El golpe se colapsó. Mientras tanto, los dirigentes de los «cordones industriales», alentados verbalmente por Allende y la CUT, tomaron más de 350 fábricas, que se negaron a abandonar incluso después de que el Regimiento se hubiera rendido.

Aunque Allende sobrevivió al «tancazo» (como muy pronto se apodó la rebelión), su posición política se deterioraba rápidamente. El presidente pidió al Congreso que le otorgara poderes excepcionales, pero los legisladores rechazaron la petición. A continuación, Allende intentó aplacar a la oposición reorganizando su gabinete, pero no logró poner a los militares en Ministerios importantes y esto socavó el esfuerzo de reconciliación. A estas alturas, los nacionales habían rechazado cualquier tipo de arreglo con Allende y el PDC veía la presencia militar en el gabinete como la única forma de defender la Constitución. Allende, sin embargo, realizó entonces un último esfuerzo desesperado por llegar a un acuerdo con el PDC. Se pasó la mayor parte del 30 de julio negociando los principales puntos en conflicto con el presidente del Partido Demócrata Cristiano de entonces, el senador Patricio Aylwin, y con el vicepresidente del mismo, el senador Osvaldo Oliguin. Allende finalmente aceptó la demanda del PDC de que el gobierno pusiera en vigor la Ley de control de armas, discutiera la participación militar en el gabinete y considerara algunas restricciones al Área Social y a la reforma agraria. A cambio, sin embargo, él pedía al Congreso que reconociera que se requería una mayoría de dos tercios para revocar los vetos presidenciales. Ambas partes prometieron establecer comités especiales para continuar con las negociaciones. No obstante, debido a la presión ejercida por algunos intransigentes, tanto de la UP como del PDC, los comités nunca se reunieron. El 17 de agosto, Allende y Aylwin se vieron nuevamente (en secreto) en la casa del cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, pero resultó imposible retomar las negociaciones. Las «conversaciones» Allende-Aylwin fueron el último esfuerzo real que ambas partes hicieron para llegar a un acuerdo.

El país había entrado en los últimos días de la «transición hacia el socialismo», cuyo destino se había mostrado tan aciago. La economía, debilitada por la costosa huelga de El Teniente, se vio aún más deteriorada por la acción recurrente de los camioneros, quienes afirmaban que el gobierno estaba tratando de destruirlos retirando los repuestos del comercio. Tal como en octubre de 1972, los gremios se movilizaban en un segundo enfrentamiento decidido. Este movimiento fue aún más grande que el anterior. Una vez más, a la polarización se sumaba la parálisis nacional.

Es grande la tentación de comparar la amarga lucha de 1973 con episodios similares del propio pasado de Chile: la contienda entre Manuel Montt y la Fusión Liberal Conservadora; la movilización de los partidos contra Balmaceda; incluso, quizá, la resis-

tencia a las reformas de Arturo Alessandri. En estos tres casos, el resultado fue algún tipo de trastorno mayor: la guerra civil o la intervención militar. El enfrentamiento entre la UP y la oposición PDC-Nacional había llegado a una escala mucho mayor que cualquiera de sus predecesores. La diferencia esencial radicaba en que ocurría en la época de la política moderna y de masas, en la época—sin ir más lejos—de los medios de comunicación masivos, con lo cual difícilmente había alguien en el país que no se viera afectado o ignorara lo que estaba ocurriendo. Las familias estaban divididas; antiguas amistades habían llegado a un punto de ruptura; todo el mundo perdía la cabeza. Hubo un momento en que muchas de las virtudes chilenas tradicionales, especialmente la virtud de la convivencia, esa capacidad para respetar puntos de vista diferentes, parecían totalmente en retroceso.

Una pregunta que se suele plantear a posteriori es si la abrumadora emergencia de 1973 fue causada o bien exacerbada por la intromisión externa, específicamente por parte de los Estados Unidos. Ni el Presidente Nixon ni su inútil asesor en política internacional (y pronto secretario de Estado) Henry Kissinger se preocuparon de mantener en secreto su aversión por el gobierno de la UP. Impulsados por su irreflexiva visión de la *Realpolitik*, ellos fueron sin duda los principales autores de la restricción crediticia contra Chile organizada en Washington, y de las diversas formas de «acción encubierta» empleadas por la CIA en Chile en sus esfuerzos por lograr la «desestabilización» política²⁷. Las intenciones de Nixon eran claras como el cristal y la asignación de 8 millones de dólares a la CIA para sus operaciones contra Allende (gran parte de los cuales fueron utilizados para subsidiar a la oposición, incluido *El Mercurio*) fue por mucho tiempo de dominio público, gracias especialmente al Congreso de los Estados Unidos. No obstante, siempre queda la duda de si la CIA produjo una gran diferencia: a pesar de lo triste que pueda ser esta afirmación, la verdadera «desestabilización» de Chile fue obra de los chilenos. Tal como afirmó Patricio Aylwin, dieciséis años después, «a todos nos cupo responsabilidad».

En el devastador clima político de mediados de 1973, los acontecimientos desarrollaron una inercia propia ineluctable. El 26 de julio, unos atacantes desconocidos asesinaron al edecán naval de Allende, comandante Arturo Araya. Se hicieron esfuerzos por sobornar a una unidad de la FACH cerca de Viña del Mar. En una acción todavía más nefasta, el MIR, el MAPU y los militantes socialistas trataron de fomentar un motín en dos barcos de guerra anclados en Valparaíso y también en la base naval de Talcahuano. Carlos Altamirano anunció provocadoramente que sabía de antemano sobre el abortado motín naval y que había apoyado tales acciones. ¿Realmente pensaba que esto no dejaría secuelas en los corazones y las mentes de los militares?

²⁷ Esta horrible palabra entró en el idioma inglés dentro del contexto chileno. Ver la entrada para «destabilization» en el *Oxford English Dictionary*, 2ª ed. El verbo «to destabilize» es considerablemente más antiguo.

A medida que la atmósfera de violencia empeoraba, Allende trató desesperadamente de mantener cohesionado a su gobierno. A comienzos de agosto, formó un nuevo gabinete, nombrando al general Prats como ministro de Defensa, al almirante Raúl Montero como ministro de Hacienda y al general de la FACH, César Ruiz, como ministro de Obras Públicas. La decisión del presidente de volver a incluir a los militares en el gobierno, obviamente concebida para reconciliarse con el PDC, llegó demasiado tarde. El país ya había entrado en un estado de limbo político. Ninguna persona o institución imponía suficiente respeto como para superar el *impasse*. Los «ultras» de la UP, dirigidos por un Altamirano siempre con tanto tacto, se negaron a negociar con los «dirigentes reaccionarios y contrarrevolucionarios o con los partidos»²⁸. La oposición ventiló similares sentimientos, aunque sin la misma retórica. Una coalición de los parlamentarios del PDC y del Partido Nacional, argumentando la tolerancia del gobierno ante los grupos paramilitares armados, su uso de oscuros decretos para expropiar la propiedad y su continua negativa a cumplir las decisiones judiciales, aprobó una resolución (el 22 de agosto) que acusaba al gobierno de quebrantar la ley a todo nivel. A la coalición le faltó poco para comenzar a defender un golpe de estado; aunque pedía a los miembros militares del gabinete «poner término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes»²⁹. Esto dejaba al presidente Allende virtualmente con las manos atadas. Su propuesta final para dar una solución política a la crisis—un plebiscito nacional que, posiblemente, llevaría a una asamblea constitucional—fue sometida a una seria discusión por los partidos de la UP a comienzos de septiembre, pero se vio superada por los acontecimientos.

Los militares, ante la opción de defender al gobierno y montar una rebelión, finalmente eligieron esto último. «Quien salva a su Patria no viola ley alguna»—un oficial naval citaría la frase de Napoleón de que la suerte, finalmente, estaba echada³⁰—. Sin embargo, la decisión no fue para nada fácil. Aunque algunos oficiales habían contemplado la posibilidad de un golpe de estado ya a mediados de 1972, esta idea tardó en prosperar. El creciente caos, las insinuaciones de la oposición, la demanda pública efectuada por los militantes de la izquierda de que el Estado reemplazara las fuerzas armadas por «milicias populares» y el abortado motín naval (con el apoyo explícito de Altamirano)—todo esto convenció finalmente a la mayoría de los oficiales de que debían retirar su apoyo al gobierno de Allende—.

Antes de que los militares pudieran actuar, sin embargo, tenían que sacar del paso a las personas designadas por Allende. Cuando una delegación de generales informó a Prats de que ya no gozaba de su confianza, el comandante en jefe renunció (21 de agosto)—ya antes había sido el blanco de una manifestación impropia por parte de sus esposas—. Lo reemplazó

²⁸ Arturo Valenzuela, *The Breakdown of Democratic Regimes. Chile*, Baltimore, 1987, pág. 94.

²⁹ *El Mercurio*, 23 de agosto de 1973.

³⁰ Florencia Varas y José Manuel Vergara, *Operación Chile*, Buenos Aires, 1974, pág. 73.

el general Augusto Pinochet, a quien Allende consideraba tan sólidamente «constitucionalista» como a Prats. Cambios similares ocurrieron en los otros servicios armados. Los oficiales navales, emulando a sus colegas del Ejército, lograron la deposición del comandante de la Marina, almirante Raúl Montero, cuyo cargo fue ocupado por el almirante José Toribio Merino. El comandante de la FACH, general César Ruiz, fue destituido por el propio Allende, en un tenso episodio. Su sucesor, el general Gustavo Leigh, no necesitaba granjearse su amistad. El camino había quedado despejado. El domingo 9 de septiembre, los dirigentes de las fuerzas armadas, con el apoyo de Carabineros, realizaron un pacto para derrocar al gobierno.

La operación no requirió muchos preparativos. El Ejército pretextó el desfile militar anual del 19 de septiembre —incluida en las fiestas patrias, casi tan antiguas como la República misma— para enmascarar el traslado de unidades a Santiago. El martes 11 de septiembre (en un comienzo, el general Pinochet había propuesto el 14 de septiembre) se fijó como fecha para la rebelión. Tal como estaba planeado, la flota zarpó de Valparaíso, supuestamente para participar en las maniobras conjuntas con la Marina norteamericana que se venían realizando desde hacía muchos años. Amparados por la noche, los buques de guerra volvieron al puerto para capturar Valparaíso. La FACH ya había ordenado a sus bombarderos que se dirigieran hacia el sur, libre de peligro. El 11 de septiembre, antes del amanecer, el Ejército entró en acción. A primeras horas de la mañana, había capturado Concepción «la Roja», mientras la Marina tomaba el control de Valparaíso sin dificultades. La lucha más encarnizada se produjo en Santiago, especialmente entre el Ejército y los francotiradores. El presidente Allende, informado de la rebelión naval en las primeras horas de la mañana, dejó su residencia para dirigirse a La Moneda. Allí se enteró de que los comandantes en jefe apoyaban el golpe de estado y de que los carabineros que defendían el palacio se estaban retirando, dejando al presidente virtualmente sin protección.

Aunque las fuerzas armadas rápidamente redujeron a sus opositores en las provincias y en la capital, el propio Allende continuó resistiendo. Atrincherado en La Moneda con un puñado de guardias personales, rechazó el ofrecimiento de una salida segura del país. Transmitió al aire un último discurso profundamente conmovedor a través de una emisora de radio que todavía no había caído en manos de los militares. Traicionado por sus soldados, el presidente se mantuvo firme. Para realizar un ataque sorpresa, los *Hawker Hunters* de la FACH volaron desde Concepción y bombardearon en un vuelo rasante el palacio³¹; luego, la infantería asaltó La Moneda en llamas.

Nunca antes el palacio había ardido. Fue el momento más desolador y trágico de la historia moderna de Chile. Alrededor de las dos de la tarde, Salvador Allende —médico, masón, socialista y presidente de la República— se suicidó disparándose a la cabeza con una ametralladora.

³¹ Los cohetes fueron disparados justo desde la Estación Mapocho.

Los años de Pinochet

No se mueve ninguna hoja de este país si yo no la estoy moviendo.

General Augusto Pinochet, septiembre de 1981

CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN DE PINOCHET

El 11 de septiembre de 1973 —«el once», como lo apodaron los chilenos desde entonces— se produjo la peor quiebra política en la historia de la República. Quizá debido a que la desesperación nacional había alcanzado un nivel inaudito en 1973¹, las secuelas fueron mucho más prolongadas de lo que nadie hubiera podido imaginarse. A finales de julio de 1989, el general Augusto Pinochet rompió el récord de mayor permanencia en el mando entre todos los gobernantes chilenos desde 1540 —hasta entonces detentado por el gobernador Gabriel Cano de Aponte con quince años y diez meses (1717–1733)—. En el momento de dejar el cargo, Pinochet había gobernado Chile ocho meses más que su predecesor colonial.

La mano dura de una represión inclemente golpeó de inmediato con el nuevo régimen. Se cerró el Congreso. Los partidos de la UP fueron prohibidos; otros, declarados «en receso» (hasta 1977, cuando también fueron prohibidos). Se impuso un estricto toque de queda nocturno que duró varios años. Los periódicos y las revistas de izquierda desaparecieron de los quioscos. La administración pública fue purgada concienzudamente. En la etapa inicial del régimen, prácticamente todas las instituciones nacionales importantes (incluida la Federación de fútbol) quedaron en manos de oficiales militares o navales, algunos de los cuales ya estaban en retiro y fueron llamados de nuevo al servicio. Uniformados «rectores designados» fueron puestos a la cabeza de las universidades (también purgadas con minuciosidad). De la noche a la mañana, la atmósfera en Chile se vio transformada. El primer ministro del Interior del régimen, general Óscar Bonilla (muerto

¹ Ambos autores de manera independiente (tanto antes como después del golpe) escucharon a amigos chilenos perfectamente inteligentes y racionales expresar la idea de que anhelaban una intervención *militar* extranjera (norteamericana o europea) para terminar (en el primer caso) con la total confusión y (en el segundo) con la dictadura.

en un accidente de helicóptero en 1975) replicó a un sindicalista del comercio que lo visitaba en su oficina: «Deje de usar la palabra *exigencia*; no se olvide que ésta es una dictadura»². Nadie podría haberlo expresado mejor.

La ferocidad del golpe y la severidad de los primeros decretos de la Nueva Junta militar hizo que los observadores (especialmente quizá los periodistas) asumieran que la carnicería había sido enorme. Lo que Edward Gibbon llamó una vez «el cálculo melancólico de las calamidades humanas» pasó a ser en los años siguientes un juguete político. Radio Moscú informó en una transmisión memorable de que 700.000 personas habían muerto en los dos días que duró el golpe. Incluso el hecho de que se hubiera asesinado a unos cuantos miles en poco tiempo (muchos de ellos simplemente desaparecidos), ya era algo muy traumático para cualquier país pequeño, en especial para un país pequeño que no estaba acostumbrado a tales convulsiones. Los activistas de los partidos de la UP fueron perseguidos sin tregua hasta su captura; algunos fueron fusilados directamente; muchos otros (al menos 7.000) fueron conducidos como rebaños al estadio nacional de Santiago, el principal centro donde comenzaban los interrogatorios. Varias docenas de destacados allendistas (incluidos los ministros del gabinete) fueron enviados a los desolados parajes de la isla Dawson en el Estrecho de Magallanes. Al igual que en 1948, Pisagua recibió cierta cantidad de prisioneros. Lo mismo ocurrió con la isla de la Quiriquina, en la bahía de Talcahuano, donde Bernardo O'Higgins había visto pastar alguna vez a su ganado. A todo lo largo y ancho del país se abrían campos de concentración. Los arrestos se contaban en decenas de miles y decenas de miles eran también los chilenos que fueron simplemente desterrados. A mediados de 1978, tan sólo los exiliados en Europa occidental sumaban casi 30.000 chilenos. Cientos de miles ya se habían exiliado a finales del decenio. Sólo en la década de 1980 se les permitió a los exiliados volver a Chile y muchos (pero de ninguna manera todos) retornaron a su patria.

La paz y la calma externas, la tranquilidad tan a menudo ensalzada por la Junta y quienes estaban a cargo de promoverla, rápidamente volvieron a Chile. Con el fin de asegurar su mantenimiento, se creó sin demora un moderno Estado policial. Antes del final de 1973, una nueva policía secreta, controlada directamente por el general Pinochet, había sido formada. Se trataba de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) —sinistro acrónimo que los periódicos dudaron varios meses en publicar—. Comandada por el coronel (luego general) Manuel Contreras, la DINA reclutó a la mayoría de sus agentes entre los miembros del Ejército. En 1977 contaba con una fuerza activa de alrededor de 10.000 hombres: sus informantes pagados sumaban dos o tres veces esa cantidad. A la DINA se pueden atribuir la mayoría de los horribles incidentes de tortura documentados por la Iglesia católica (en Chile) y por organizaciones como Amnistía Internacional (en el extran-

jero). Sus conocidos centros de tortura incluían la Villa Grimaldi, una mansión en La Reina (barrio en los márgenes orientales de Santiago) —que el retorcido humor de la DINA bautizó como «el palacio de la risa»—. En sus primeros meses, la DINA se puso como objetivo al MIR y al Partido Comunista, y no les dio tregua. Fuentes fidedignas señalan que el propio general Pinochet habría dicho: «Los miembros del MIR *deben* ser torturados [...] Sin tortura no cantan»³. Algunos cantaron; a otros, la DINA logró «convertirlos» (para usar el gráfico lenguaje del espionaje moderno).

En ciertas ocasiones, el brazo de la DINA llegó mucho más allá de las fronteras chilenas. Quienes corrían el mayor peligro eran aquellas figuras exiliadas que podían encabezar un nuevo gobierno postmilitar. En septiembre de 1974, el general Carlos Prats y su esposa (quienes se habían autoexiliado inmediatamente después del golpe de estado) fueron asesinados con un coche bomba colocado frente a su apartamento en Palermo, Buenos Aires. En octubre de 1975, el popular político del PDC Bernardo Leighton fue tiroteado en Roma y apenas sobrevivió (falleció luego en 1995). Otro coche bomba segó la vida de Orlando Letelier (septiembre de 1976), esta vez fuera de la embajada chilena en Washington D. C., donde este distinguido y querido socialista había trabajado antes como embajador del presidente Allende. El ultraje terrorista perpetrado en la capital de su nación puso en campaña de inmediato al Departamento de Justicia norteamericano y al FBI. El rastro de las pruebas llevaba inexorablemente a Santiago y a la DINA. La presión norteamericana (ejercida hábilmente) consiguió la extradición del principal agente de la DINA responsable (casualmente un norteamericano, que luego fue encarcelado en los Estados Unidos); sin embargo, otras extradiciones, incluida la de Contreras, fueron dene- gadas con decisión.

La intensa conmoción nacional e internacional provocada por el caso Letelier (y las fuertes opiniones en el interior del Ejército) obligaron a Pinochet a dismantelar en cierta medida la DINA. Ésta fue reemplazada (en agosto de 1977) por una policía secreta algo más reducida y conocida como la Central Nacional de Informaciones (CNI). A estas alturas, el nivel de represión había disminuido un poco. Enero de 1977 fue el primer mes tras el golpe de estado en que no se reportó a la Iglesia católica ninguna «desaparición». Sin embargo, las desapariciones, la tortura y el asesinato siguieron ocurriendo a intervalos regulares casi hasta el final del régimen militar. Intenso furor provocó en marzo de 1985 el asesinato de tres profesionales comunistas (un profesor, un sociólogo y un artista retirado); fueron degollados y sus cuerpos abandonados en una carretera a las afueras de Santiago.

Con los partidos políticos prohibidos, las cortes de justicia vergonzosamente descendientes y la vigilancia de la policía secreta sobre toda la sociedad, la única institu-

² Citado en Eugenio Ahumada *et al.*, *Chile, la memoria prohibida*, 3 vols., vol. III, 1989, pág. 491.

³ Citado en Sheila Cassidy, *Audacity to Believe*, Londres, 1977, pág. 158.

ción capaz de conservar alguna línea más o menos independiente era la Iglesia católica. Aproximadamente un mes después del golpe de estado, el cardenal Raúl Silva Henríquez promovió la creación de un «Comité de la Paz» ecuménico que debía prestar ayuda legal a las víctimas de la represión y llevar un archivo de las violaciones a los derechos humanos. En noviembre de 1975 se ordenó su cierre, pero el trabajo (siempre difícil y a veces incluso heroico) continuó en una nueva Vicaría de la Solidaridad, que dependía directamente del propio Cardenal (creada en enero de 1976). Pinochet y sus colegas recibían enfurecidos las críticas de la Iglesia, que ésta extendió después a la política económica del régimen. Dada la posición de la Iglesia en la vida chilena resultaba imposible efectuar ningún contraataque serio. En abril de 1977, cuando un ministro de Justicia se permitió realizar comentarios desusadamente agrios sobre la Iglesia, Pinochet lo destituyó.

En los regímenes autoritarios, la política no desaparece; simplemente se torna secreta. El rasgo más notable de la política autoritaria chilena tras septiembre de 1973 fue el irrefrenable auge del general Pinochet. Su posición como comandante en jefe del Ejército le daba una ventaja sobre sus colegas, que él rápidamente supo reconocer. La idea original de que la presidencia de la Junta rotara entre sus miembros (el propio Pinochet; el almirante José Toribio Merino, Marina; el general Gustavo Leigh, FACH; el general César Mendoza, Carabineros) fue desechada rápidamente. A finales de 1974, Pinochet se había arrogado el título de presidente de la República, con lo cual el régimen se fue haciendo cada vez más personal. Y aunque no se llegó a constituir ningún verdadero «culto a la personalidad» de Pinochet real y sistemático, sus uniformes se fueron haciendo cada vez más espléndidos con los años y, en 1981, revivió (para su uso personal) el antiguo título colonial de capitán general. El paso siguiente, decían los ingeniosos de Santiago, era restaurar la encomienda.

Aunque en los primeros años del régimen se produjeron algunos cambios administrativos importantes —especialmente la división de la República en doce nuevas regiones⁴—, Pinochet (al igual que Ibáñez en la década de 1920) no realizó esfuerzos serios por consolidar un movimiento político propio. Tras el trauma de 1973, tal movimiento podría haber contado con numerosos seguidores si se lo hubiera organizado con suficiente rapidez, pero también habría entrado en conflicto con el deseo de Pinochet de «despolitizar» al país por un largo periodo. Y, además, al capitán general nunca le faltó el apoyo masivo de la población. La hostilidad contra Allende y la UP se tradujo fácilmente en admiración por su némesis. A un nivel más profundo, la severa imagen de Pinochet (realizada por los

⁴ Las nuevas regiones (1974), cada una gobernada por un Intendente regional y con cierta cantidad de provincias, fueron numeradas del I al XII; Santiago y sus zonas aledañas pasaron a formar el Área Metropolitana. Veinte años después, las regiones (a las cuales generalmente se hacía referencia por sus números) estaban empezando a cobrar una identidad propia.

anteojos oscuros que solía llevar) tocaba sin duda un punto sensible en la cultura chilena. En tanto castigaba a los indisciplinados y premiaba a los obedientes, ¿no era acaso el representante máximo de la autoridad del patrón de fundo? ¿Acaso no tenía también algo de la astucia y del ingenio del huaso tradicional? Puede que haya sido un dictador, pero al menos era reconocible como un dictador *chileno*. Para él, dichas cualidades constituían una fuente de fuerza. Además, tampoco se puede negar que sus rudos llamamientos a la reconstrucción nacional y sus invocaciones a Diego Portales y Bernardo O'Higgins (quizá incluso su autoidentificación con ellos), tocaban una fibra patriótica en muchos corazones⁵.

Propia de un huaso, la sagacidad de Pinochet le sirvió mucho para mantener a raya a quienes desafiaban su poder personal. Cuando su colega de la FACH, el general Leigh, declaró en un periódico italiano —con una falta total de tacto— sus esperanzas de que pronto se produjera una «normalización» política, Pinochet rápidamente (y corriendo algunos riesgos) lo destituyó (julio de 1978)⁶. También se mantuvo firme en el Caso Letelier, lo cual tensó las relaciones con los Estados Unidos, cuya política internacional se encontraba entonces en una etapa bastante atípica gracias a la positiva fe del presidente Jimmy Carter en los derechos humanos. Las restricciones norteamericanas en términos de ayuda militar (impuestas por primera vez en diciembre de 1974 y ampliadas en febrero de 1976) no tuvieron repercusiones significativas para el régimen: los países europeos, salvo ciertas prohibiciones de corta duración, estaban en condiciones (al igual que Brasil) de abastecer con armas a Chile. Además, la propia industria de armamentos del país se vio favorecida con una especie de florecimiento. Esto quedó de manifiesto con el auge de la planta de Iquique del empresario Carlos Cardoen, quien, al cabo de poco tiempo, comenzó a vender bombas de racimo a Irak.

En términos inmediatos, más peligrosa que Jimmy Carter resultó la repentina crisis que estalló entre Chile y Argentina a raíz de una antigua disputa sobre tres pequeñas islas en el canal Beagle. La disputa ya había sido sometida a la mediación de la corona británica (1971). En enero de 1978, Argentina rechazó la decisión de la reina Isabel II de otorgar las islas a Chile. La tensión entre Santiago y Buenos Aires se tornó muy seria y, durante algunas semanas, la perspectiva de una guerra pareció muy real. En diciembre de 1978, el papa Juan Pablo II impuso con éxito su mediación y el peligro inmediato se esfumó. Un primer

⁵ Un culto oficial menor a la persona de Diego Portales se vio en los primeros años del régimen. Éste desapareció a finales de la década de 1970, probablemente por el énfasis renovado que le dio a O'Higgins la celebración de su bicentenario (1978).

⁶ Leigh fue reemplazado por el general Fernando Matthei, quien formó parte de la Junta mientras el régimen se mantuvo. El general Mendoza, director de Carabineros, renunció (agosto de 1985) como resultado del juicio por el asesinato de tres profesionales comunistas en marzo de 1985 y fue reemplazado por el general Rodolfo Stange.

borrador del fallo papal (que confirmaba la soberanía chilena de las islas) estuvo listo a finales de 1980. No obstante, el régimen militar de Argentina seguía faltando a su deber. Entonces, Pinochet tuvo un inesperado golpe de suerte. La derrota de Argentina por parte de Gran Bretaña en la breve guerra de las Malvinas (abril-junio de 1982) —durante la cual Chile prestó una ayuda discreta y bastante secreta a los británicos— eliminó la perspectiva de futuras acciones militares por ese lado. En 1985 se firmó el tratado correspondiente.

Para entonces, el régimen chileno había entrado en una segunda etapa. En julio de 1977, el propio Pinochet anunció su intención de conducir a Chile a una nueva democracia, si bien «protegida». Un pequeño grupo de juristas conservadores ya se encontraba trabajando (a un paso bastante pausado) en una nueva Constitución. El borrador completo fue entregado al nuevo Consejo de Estado, creado en 1976 y con características más bien honoríficas. Cuando su presidente, Jorge Alessandri, hizo algunas sugerencias que Pinochet calificó de demasiado liberales, renunció molesto. El tenor de la versión final era marcadamente autoritario. Entre otras cosas, establecía una Presidencia de ocho años extremadamente fuerte, un Congreso con poderes más limitados que antes (y con un tercio del senado designado, en vez de elegido) y varios mecanismos institucionales para garantizar la influencia militar en los futuros gobiernos. Además, los «artículos transitorios» (muy numerosos) seguirían vigentes por casi una década. El mismo Pinochet ocuparía el primer mandato de ocho años, al cabo del cual se realizaría un plebiscito para ratificar (o rechazar) al candidato de los militares (llegado el momento, el propio Pinochet, como era predecible) para un segundo mandato (1989-1997). Sólo entonces se podría llamar a elecciones parlamentarias —junto con elecciones presidenciales en caso de que la votación por el «no» ganara el plebiscito—.

Al igual que en 1925, fue necesario realizar un plebiscito para dar a la Constitución un baño de legitimidad. El país se vio inundado por la propaganda, pero sólo de un lado. Quienes se oponían a la Constitución (el ex presidente Frei era el más elocuente) no tuvieron prácticamente ninguna oportunidad para hacer su campaña. Llegado el día (11 de septiembre de 1980), más de seis millones de chilenos votaron. En esas circunstancias, no es muy fácil determinar si el resultado (67% a favor, 30% en contra) era una expresión indiscutiblemente limpia de la voluntad popular. Seis meses después (el 11 de marzo de 1981), Pinochet comenzó su mandato de ocho años. En un gesto sumamente simbólico, trasladó su oficina al palacio de La Moneda, para entonces completamente restaurado.

LA VÍA CHILENA HACIA EL CAPITALISMO

Cuando tomaron el poder, los generales no sabían prácticamente nada de economía. Tenían que estabilizar y reactivar una economía muy caótica y necesitaban consejo urgente.

Ciertos economistas estaban deseosos de darlo. Habían salido de la Universidad Católica y, algunos de ellos, del Departamento de economía de la Universidad de Chicago —sede principal de la nueva y floreciente ortodoxia del «monetarismo» y del *laissez-faire* sin restricciones—. La figura clave de este grupo fue Sergio De Castro, el duro decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad católica. Al hacerse conocidos —lo que ocurrió pronto—, estos economistas chilenos «neoliberales» fueron apodados «los *Chicago Boys*». El nuevo régimen los colocó en cargos oficiales y un grupo importante entró en ODEPLAN, la oficina de planificación del Estado. Los efectos de su asesoría en materia de política económica fueron inmediatos: en octubre de 1973, se abolieron casi todos los controles de precios y el escudo fue devaluado (de 50 a 250 por dólar) con una tasa cambiaria única y unificada.

No obstante, los *Chicago Boys* no consiguieron una victoria fácil. En un momento de precios en fuerte alza y creciente desempleo, su austera visión de un capitalismo sin restricciones era considerada demasiado arriesgada por muchos militares y dirigentes empresariales. En 1974, por otra parte, Chile comenzó a sentir los efectos de la devastadora recesión internacional producida por la «primera crisis del petróleo» —los precios del petróleo se cuadruplicaron tras la guerra árabe-israelí de octubre de 1973—. A mediados del 1974, el precio del cobre comenzó a bajar de manera alarmante. Además, a pesar de los esfuerzos iniciales del régimen, la inflación parecía seguir fuera de control. Estas dificultades cada vez mayores coincidían con la consolidación del poder personal de Pinochet. Fue precisamente entonces (marzo de 1975) cuando el *gurú* norteamericano del monetarismo, el profesor Milton Friedman, consideró adecuado visitar Chile: habló con Pinochet, recalando la necesidad de un «tratamiento de choque» para eliminar la inflación. En abril de 1975, Pinochet mandó a paseo la cautela y se inclinó de manera decisiva en favor de los *Chicago Boys*, confirmando poderes extraordinarios a Jorge Cauas (su ministro de Hacienda desde julio de 1974) y nombrando a Sergio De Castro como ministro de Economía. De Castro tomó el cargo de ministro de Hacienda cuando Cauas renunció en diciembre de 1976.

Los *Chicago Boys* quedaron entonces completamente a sus anchas. Su energía y dogmatismo no los hizo universalmente populares. Sacaron el máximo provecho de su alianza con Pinochet, dirigiendo magistralmente la reconstrucción económica más sustancial de Chile en el siglo xx. Sus objetivos eran utópicos y exhaustivos. Querían revertir por completo la línea de intervencionismo estatal que se había desarrollado en Chile desde la década de 1920, a la cual culpaban (con razón o sin ella) de haber detenido el crecimiento económico. Éste podía garantizarse, sostenían, abriendo la economía e incentivando las «ventajas comparativas» del país en los mercados de exportación. Para conseguir estos objetivos, era preciso imponer a toda la sociedad un sistema de mercado; una nueva cultura empresarial reemplazaría a la habitual dependencia estatal; el Estado mismo debía confinarse desde entonces a su clásico papel de «sereno».

Cauas aplicó inmediatamente el «tratamiento de choque». El gasto fiscal fue reducido en más de un 25%; el volumen de circulante, controlado férreamente; y las tasas de interés, más que triplicadas. Y ocurrió lo que era predecible: una profunda recesión con una tasa de desempleo que aumentó en casi el 20% (y los salarios reales en una bajada de hasta el 60% respecto de su monto en 1970). A finales de 1975, el PIB había disminuido alrededor de un 15%; la producción industrial, un 25%. Las inevitables penurias económicas llevaron al régimen a instituir un Programa de Empleo Mínimo (PEM) con un salario bajo: en 1976, financiaba a 200.000 hombres que trabajaban en la pavimentación de carreteras y otras labores similares.

A pesar de la recesión, el programa neoliberal siguió adelante con gran celo durante los siete años siguientes. Se aceleró la privatización de las más de 400 compañías pertenecientes al Estado, controladas por el Estado o «intervenidas» (iniciada en 1974), aunque un núcleo duro de grandes empresas «estratégicas» (muchas de ellas dirigidas ahora con eficiencia por militares) permanecieron en el sector público —el cual, diez años después del golpe de estado, aún era más grande de lo que lo había sido en la época del presidente Frei—. Mientras tanto, los derechos de importación bajaron de un promedio del 70% en 1974, a un 10% prácticamente igual para todos los artículos a finales de la década —con consecuencias bastante predecibles para la industria chilena, cuya participación en el PIB cayó en un 20% entre 1975 y 1982—. También se aprobó una legislación muy liberal para las inversiones extranjeras (1974, 1977). El sistema tributario fue renovado, con la introducción de un impuesto al valor añadido de estilo europeo (el IVA), entre otras cosas. En 1975, se reformó la moneda: 1.000 escudos se convirtieron en un peso (un millón de los pesos abolidos en 1960). En junio de 1979, en parte para neutralizar la inflación «importada», De Castro instituyó una tasa cambiaria fija de 39 pesos por dólar.

En el campo, el impacto neoliberal fue avasallador. La reforma agraria había sido detenida de golpe. El gasto del gobierno en la agricultura fue cercenado. El personal del Ministerio de Agricultura (incluidos organismos como la CORA y el INDAP) fue reducido de 27.000 funcionarios en 1973 a 5.000 en 1980. Prácticamente un tercio de toda la tierra agrícola del «sector reformado» fue devuelta a sus antiguos dueños, alrededor de la mitad fue dividida en parcelas que se entregaron a los campesinos (aunque de ninguna manera a todos ellos) y la mayor parte del resto fue rematada por la CORA. En 1979, una nueva ley incentivó a los mapuches para que subdividieran sus tierras comunitarias en parcelas privadas. Casi un tercio de las aproximadamente 3.000 comunidades habían hecho eso mismo en las décadas de 1930 y 1940. Estas diversas medidas, sin embargo, no propiciaron la restauración de la hacienda tradicional. Rápidamente, la unidad agraria fundamental pasó a ser «el campo», con importantes inversiones en capital y una explotación intensiva con fines comerciales, generalmente dedicada al mercado de exportación (la ubicación de Chile en el hemisferio Sur le permitía una vez más desempeñar el papel que ya habíamos

señalado en relación con los auges del trigo del siglo XIX). Por otra parte, surgieron también las plantaciones de pinos en el sur, generosamente subsidiadas por el Estado. Si bien algunos campesinos lograron sobrevivir en este nuevo medio impresionante, otros (alrededor de un tercio de los beneficiarios originales de comienzos de la década de 1980) vendieron sus parcelas y, a veces, se trasladaron a las nuevas poblaciones rurales. Los nuevos «agronegocios» no ofrecían en modo alguno el paternalismo de la vieja hacienda, ni tampoco muchos trabajos estables. Por ende, la nueva y dinámica agricultura chilena tuvo como coste una intensificación de la pobreza rural —los pobres pasaron a ser las víctimas de la modernización capitalista más que de la inercia y la jerarquía del pasado—.

En términos económicos convencionales, esta dura «reestructuración» neoliberal parecía dar frutos. La inflación cayó de tres dígitos a dos y finalmente a uno (9,5% en 1981). La economía comenzó a salir de la recesión de 1975-1976, con un alza en el PIB del 7% promedio anual entre 1976 y 1981. Impulsado por un nuevo organismo de promoción de las exportaciones (Pro-Chile, 1974) —no completamente aprobado por los puristas neoliberales—, el crecimiento de las exportaciones «no tradicionales» (de los campos y bosques) resultó especialmente impresionante. Las manzanas chilenas aparecieron en los supermercados ingleses; algunos vinos chilenos de buena calidad, en las bodegas norteamericanas. A mediados de la década de 1990, las acciones de una de las viñas tradicionales clásicas, Concha y Toro⁷, estaban siendo cotizadas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Si en la década de 1960 el cobre representaba alrededor del 90% del total de las exportaciones (en promedios anuales); en la década de 1980, alcanzaba menos del 50%.

Las privatizaciones de la década de 1970, en la ciudad y en el campo, proporcionaron excelentes oportunidades a los conglomerados financieros tanto antiguos como nuevos (y especialmente a estos últimos) para construir grandes imperios empresariales en condiciones muy favorables (con efectos equivalentes a los que habría tenido un subsidio estatal). A finales de la década, unos cuantos de esos «grupos económicos» controlaban gran parte del sistema bancario y de las nuevas «financieras» (empresas de finanzas no reguladas) y, a través de sus numerosas compañías asociadas, una fracción cada vez mayor de los sectores manufacturero y agroexportador. Gracias a la recolocación de los capitales provenientes de los bancos europeos y norteamericanos tras la primera crisis del petróleo, los conglomerados solicitaron préstamos externos en gran cantidad y usaron el dinero para comprar compañías y hacer préstamos a su vez (por lo general a sus propios asociados) a las tasas locales, que eran mucho más altas. Se produjo entonces un *boom* en la construcción, alimentado por la facilidad para obtener créditos de consumo: en 1979, apareció en escena la primera tarjeta de crédito de Chile. El país pronto se vio inun-

⁷ El nombre dio origen a un verbo reflexivo muy coloquial en Chile: «concha-y-torearse».

dado por bienes extranjeros: televisores y radios japonesas, automóviles coreanos (la cantidad de vehículos en Chile se triplicó entre 1975 y 1982), perfumes franceses y whisky escocés. Todo esto creó la poderosa ilusión de una nueva prosperidad. A pesar de la colosal deuda externa (en su mayor parte privada y por un monto de 17.000 millones de dólares en 1982), se respiraba mucho optimismo. Chile, se nos decía, se convertiría en el próximo Taiwan o Corea del Sur. En agosto de 1980, el ministro del Trabajo, José Piñera, declaró: «en 1990 Chile será un país desarrollado»⁸.

Dos años después, la economía chilena simplemente implosionó, cayendo en una recesión incluso peor que la de 1975–1976. Primero se produjo otro fuerte aumento en el precio del petróleo (la «segunda crisis del petróleo», en 1979). Una vez más la economía mundial se hundió, lo que significaba una disminución en la demanda de exportaciones chilenas —a estas alturas, menos competitivas por la tasa cambiaria fija, que sobrevaloraba el peso y producía serios problemas en la balanza de pagos—. Las tasas de interés internacionales se elevaron, dado que los Estados Unidos y Gran Bretaña también estaban adoptando duras estrategias neoliberales. En esta nueva encrucijada, los dos principales conglomerados recién establecidos, Vial (BHC) y Cruzat-Larraín, cuyo crédito internacional se hizo humo, quedaron enterrados para siempre bajo una montaña de deudas impagadas por los asociados que las habían adquirido con tanta premura. Las bancarrotas sumaron más de 800 en 1982 (habiendo alcanzado alrededor de un tercio de esa cifra entre 1977 y 1981). El PIB disminuyó en un 15 %; la fuerza de trabajo industrial se redujo en un 20 % y el desempleo se elevó por encima de su volumen de 1975–1976. A comienzos de 1983, más de medio millón de hombres se encontraban empleados en el PEM y en un segundo programa de emergencia, el POJH (Programa Ocupacional para Jefes de Hogar). Tanto los industriales como los agricultores clamaron pidiendo protección: sus organizaciones, hasta entonces menospreciadas por los *Chicago Boys*, tendrían que ser escuchadas con mayor atención en el futuro.

A mediados de 1982, De Castro se retiró del Ministerio de Hacienda y la tasa cambiaria fija que había establecido fue abandonada cuando el propio Pinochet le dijo lisa y llanamente a su nuevo ministro: «He resuelto devaluar». Otras dos devaluaciones bajaron el valor del peso en un 88%. A los deudores en moneda dura, se les asignó un dólar preferencial para amortiguar los efectos de esta medida. A comienzos de 1983, con el sistema bancario próximo a la quiebra, el régimen asumió directamente el control de los diez bancos y financieras, liquidó tres de partida y el Banco Central asumió sus deudas. Después de dos años —y no menos de cuatro ministros de Hacienda—, una nueva política económica comenzó a tomar forma. En febrero de 1985, Pinochet nombró en dicha cartera a Hernán Büchi (36 años). El hecho de que hubiera realizado sus estudios de pos-

⁸ Citado en Arturo Fontaine A., *Los economistas y el presidente Pinochet*, 1988, pág. 140.

grado en Columbia y no en Chicago, y de que éstos hubieran sido en comercio y no en economía, no pasó inadvertido. Con su pelo largo y el entusiasmo con que trotaba y andaba en bicicleta, Büchi difícilmente tenía la apariencia de un ministro de Hacienda; sin embargo, él, más que ningún otro, simbolizaba el inteligente pragmatismo que ahora reemplazaba la versión anterior y fundamentalista del neoliberalismo.

El nuevo pragmatismo se basaba en el cuidadoso manejo de la tasa cambiaria y el volumen de circulante, aunque también (en parte para controlar las importaciones) se autorizaron algunas medidas selectivas para beneficiar a la agricultura y a la industria orientadas al mercado interno, así como a los exportadores que ya habían sido tan favorecidos. Los aranceles de importación fueron fijados a niveles un poco más altos que los de 1980 y se volvieron a introducir sobretasas para algunos artículos específicos, mientras los componentes fabricados en Chile para la industria de exportación quedaban exentos de IVA. Esta mezcla de «sustitución de las importaciones» limitada y promoción de las exportaciones espoleó a las industrias y los talleres chilenos —así como a los campos del Valle Central y los bosques de pinos del sur cada vez más numerosos—. Esto ayudó a impulsar al país en una nueva etapa de sólido crecimiento iniciada a mediados de 1980, que afectó inevitablemente las tasas salariales y de empleo (y probablemente también la política). A pesar de lo anterior, la estructura neoliberal general seguía manteniéndose y se fortalecía. Durante la década de 1980, la mayoría de los programas nacionales de pensiones fueron transferidos a compañías privadas, conocidas como AFPs (Administradoras de Fondos de Pensión). Después de 1985, además, algunas empresas estatales «estratégicas» —incluida la CAP (acero) y SOQUIMICH (salitre y químicos)— fueron vendidas en una nueva ronda de privatizaciones. En algunos de estos casos, los trabajadores adquirieron un tercio del patrimonio. No obstante, incluso después de lo anterior, el sector público seguía conservando un conjunto de grandes corporaciones, incluida la ENAP (petróleo) y la enorme corporación del cobre, CODELCO.

Había llegado ahora el momento de reunir esfuerzos para atajar la gigantesca deuda externa. Esto dio algunos frutos: en términos de porcentaje respecto del PNB, ésta disminuyó del 143% en 1985 al 74% en 1990. En 1970, era un mero 8% del PNB. En esta área, Chile fue uno de los pioneros en el innovador uso de la conversión de la deuda en capital (los inversores extranjeros compraban las deudas, se las vendían al Banco Central y usaban las utilidades para comprar acciones de compañías chilenas o hacer nuevas inversiones). La inversión extranjera directa, que había sido bastante menor hasta entonces, también experimentó un fuerte aumento desde 1985 (alrededor del 40% provenía de los Estados Unidos y gran parte se utilizó con fines productivos —a diferencia de lo que había ocurrido con los préstamos especulativos de fines de la década de 1970—). La Escondida, una nueva mina de cobre de grandes proporciones y perteneciente a multinacionales norteamericanas, europeas y japonesas, comenzó a producir en 1990, con planes de crecimiento

para alcanzar un volumen similar a El Teniente. Proyectos como éstos hicieron que Chile apareciera con un perfil muy positivo en la prensa empresarial internacional. Para otros países de América Latina, atrapados en recesiones que ya duraban toda una década (como lo estaba la mayoría), el «modelo chileno» parecía sumamente atractivo a comienzos de la década de 1990.

Los efectos que la revolución económica neoliberal tuvo en la sociedad chilena han sido muy discutidos y continuarán siéndolo. Como hemos visto, el crecimiento económico que se produjo desde mediados de la década de 1980 tuvo un alto coste: dos graves recesiones y una tasa de desempleo que siguió siendo alta hasta el final del periodo. La pobreza urbana y rural sin duda empeoró durante esos años. Para quienes disfrutaban de un empleo permanente, los sueldos reales de 1990 probablemente eran tan sólo ligeramente mejores que los de hacía veinte años, aunque una vez más estaban mejorando en forma sostenida con el renovado crecimiento económico. La distribución de los ingresos se había vuelto sumamente dispar: gran parte de los beneficios del crecimiento eran acumulados por los más adinerados, mientras que el 40 % más pobre de la población y algunos sectores de la clase media (burócratas y profesores de escuela cesantes, o quienes estaban atrapados en una espiral de deudas) tenían que vérselas con niveles de vida estáticos o en descenso.

No es que el régimen militar hubiera olvidado a los pobres (aunque algunos de quienes lo apoyaban, sí lo hicieron). De hecho, los pobres más pobres (quienes estaban en la «extrema pobreza») fueron una preocupación permanente de su equipo de planificación en ODEPLAN. A fines de la década de 1980, el régimen podía mostrar con justificado orgullo significativas mejoras en las viviendas de bajo costo, el alcantarillado, la pavimentación, el suministro de agua potable, las expectativas de vida (65 años en 1973, 72 en 1990), la nutrición y la mortalidad infantiles (en 1970, Chile tenía una de las tasas más altas de América Latina; en 1990, tenía la más baja). Sin embargo, en otras áreas, el proyecto económico del régimen era socialmente perjudicial. La creación de numerosos programas de salud privada (desde 1981), las ISAPREs (Institutos de Salud Previsional), tendía a beneficiar a una minoría, aunque creciente: el total de afiliados alcanzaba 1,5 millones en 1989 e iba en aumento (para cubrir alrededor del 25% de la población en 1994). Otros chilenos (especialmente los desempleados, los enfermos y los ancianos) corrían peor suerte. El gasto en los servicios de salud estatales (regionalizados en la década de 1980) fue reducido, al igual que los niveles de atención médica y servicios hospitalarios. Es posible que la descentralización de los servicios sociales (y de la educación estatal), los cuales pasaron a manos de las municipalidades en 1981, haya reducido significativamente la burocracia, pero las municipalidades más pobres no estaban en condiciones de soportar esta nueva carga.

Además, la «reestructuración» neoliberal alteró considerablemente los esquemas de empleo tradicionales. La elevada tasa de desempleo, por sí misma, tuvo efectos muy evi-

dentes en la vida e ingresos familiares. A finales de la década de 1980, entre el 30% y el 40% de la población activa realizaba trabajos «informales», incluida la venta callejera y el servicio doméstico. Debido a una difundida práctica de subcontratación (utilizada por la industria, el campo y el mismo Estado), el empleo pasó a ser a menudo a plazo fijo o temporal —el caso más representativo es el de la recolección y empaquetado de fruta, que en la década de 1980 atrajo a miles de hombres y mujeres tanto de las ciudades como del campo—. En el campo, los trabajadores temporeros superaban a aquellos en trabajos estables por seis a uno. En las poblaciones, los masivos grupos comunales (a menudo asistidos por la Iglesia católica y por lo general dirigidos por mujeres) organizaron la producción y venta de artículos artesanales, incluidas las hermosas «arpilleras», exhibidas después en todo el mundo. Quienes no lograron insertarse en estas estrategias de supervivencia y tampoco encontraban otra salida a sus miserias, se refugiaron en el alcohol o en las ahora florecientes iglesias protestantes (en su mayor parte pentecostales)⁹: en 1985, se estimaba que alrededor del 20% de la población era protestante.

A pesar de la enorme cara oculta de la pobreza, muchos chilenos se adaptaron —y prosperaron— en el nuevo clima económico. Una nueva raza de empresarios rudos y modernos (a menudo más bien prosaicos) ocuparon su lugar junto a la generación más antigua. Los «yuppies» chilenos abundaban. Los conglomerados nuevos (y antiguos), con bases más sólidas que los de Vial o Cruzat-Larraín, crecieron de manera impresionante en la década de 1980. Las empresas más antiguas y establecidas, afectadas por las dos recesiones, se mostraron deseosas de competir con éxito en los mercados internos y, cada vez más, en los externos. Confiados en sus propias capacidades, los empresarios comenzaron a considerarse a ellos mismos como puntales de la sociedad. Por su parte, y a una escala más modesta, la «revolución informática», aceptada con entusiasmo por las empresas chilenas, ofrecía nuevas oportunidades a miles de especialistas en ordenadores bien preparados. Los cursos de ingeniería comercial, derecho comercial y contabilidad proliferaron en una serie de nuevas universidades e institutos profesionales privados.

Los tecnócratas neoliberales probablemente no planearon un profundo cambio en la cultura nacional. La encuesta de opinión realizada por Carlos Huneeus en 1986 muestra que, mientras los bancos y conglomerados eran poco apreciados por los entrevistados, los negocios pequeños y medianos eran muy bien mirados, si bien una mayoría expresaba su deseo de que la economía fuera mixta más que completamente privatizada¹⁰. Los propietarios de las exitosas pequeñas empresas que se acababan de formar, los trabaja-

⁹ En Chile constituye prácticamente una segunda Iglesia oficial (fundada en 1910), que no está vinculada, como otras Iglesias protestantes en América Central, a las sectas fundamentalistas de Estados Unidos, aunque algunas de éstas también tienen iglesias hermanas en Chile.

¹⁰ Carlos Huneeus, *Los chilenos y la política*, 1987, págs. 116-120.

dores que poseían acciones de las corporaciones recién privatizadas, los campesinos que cultivaban porotos para la exportación o verduras para el mercado de Santiago —todos ellos, quizá— sentían un creciente apego por la economía de mercado. Incluso parte de quienes trabajaban en el amplio sector «informal» podían verse a sí mismos a veces como pequeños empresarios.

Los autores Joaquín Lavín y Luis Larraín afirmaban en 1989 que Chile se había convertido en «una sociedad más eficiente [...], más humana, más informada, más culta»¹¹. Se referían a los modernos ejecutivos de las empresas, a los centros comerciales de Santiago oriente, a los supermercados y a la pavimentación de las poblaciones, a los cursos de informática, a la diversidad de expresiones culturales, a la enorme variedad de bienes de consumo en las tiendas, al crecimiento de las exportaciones industriales —esos eran, afirmaban, los signos indiscutibles de una nueva sociedad emergente, de una sociedad moderna—. Mucho de lo que decían era bastante cierto. Había múltiples huellas materiales de modernización en el Chile de 1989. No obstante, una mirada diferente y menos benigna también habría reparado, ese año, no sólo en la evidente persistencia de la pobreza, sino también en cierta atomización social, en la trivialización al estilo americano de los medios de comunicación masivos, en cierta tendencia a un consumismo más bien insensato. Algo que ningún visitante podía dejar de notar en 1989 era el hecho de que, entre otros signos de deterioro ambiental, el *smog* de Santiago era uno de los más nocivos del hemisferio Sur —producto, por una parte, del enorme aumento en la cantidad de automóviles (cerca de 1,5 millones en Chile a mediados de la década de 1990) y, por otra, de un aumento descontrolado en la cifra total de autobuses, en una ciudad que, para entonces, alcanzaba los cuatro millones de habitantes¹²—. A su modo, éste era un símbolo elocuente de «desregulación». En resumen, el gobierno de Pinochet construyó sólidas bases para los gobiernos futuros, pero también dejó muchas cosas por enmendar. *¿Pero a quién le correspondía hacerlo?*

LA RENOVACIÓN DE LA POLÍTICA

Entre las secuelas de la crisis económica de 1982–1983, hay que señalar el surgimiento de una seria oposición al régimen de Pinochet, la cual fue desatada por el movimiento obrero. Tras 1973, con la antigua CUT disuelta, los sindicatos del comercio se habían visto seriamente impedidos tanto por la represión como por una serie de nuevas restric-

¹¹ Joaquín Lavín y Luis Larraín, *Chile, sociedad emergente*, 1989, pág. 17.

¹² A finales de la década de 1980, Santiago se ufana de contar con tantos autobuses como Buenos Aires, ciudad tres veces más grande.

ciones. En 1979, el régimen introdujo su propio Código laboral (Plan Laboral), que limitaba mucho el radio de acción de los sindicatos. Su afiliación disminuyó prácticamente a la mitad entre 1973 y 1983. Aún así, como observó Alan Angell «la conciencia política y de clase no podía ser abolida por decreto»¹³ y la resistencia al régimen por parte de los trabajadores nunca cesó. A comienzos de la década de 1980, varios dirigentes sindicales se estaban haciendo conocidos a escala nacional por su postura independiente —especialmente Manuel Bustos entre los trabajadores textiles, Rodolfo Seguel entre los mineros del cobre y Tucapel Jiménez, el más antiguo, dirigente del sindicato de empleados públicos (ANEF), quien antes había apoyado al régimen—. Claramente, la creciente popularidad de Jiménez fue vista como una amenaza: en febrero de 1982, fue brutalmente asesinado por la CNI y su cuerpo abandonado en un taxi. Rodolfo Seguel («el Lech Walesa chileno», como algunos lo llamaron) tomó la iniciativa en su lugar y convocó a una huelga general de un día para el 11 de mayo de 1983. Para sorpresa de Seguel, la huelga tuvo un amplio apoyo. Santiago quedó paralizado: el sonido de los bocinazos y el golpeteo de las cacerolas mostraron que la oposición militante había vuelto a las calles de Chile. Durante los tres años siguientes, hubo aproximadamente más de veinte días de estas «protestas», con huelgas, demostraciones y peleas a la carrera con la policía.

Aunque la iniciativa de las primeras y pocas protestas provenía de los sindicatos, ésta muy pronto pasó a los partidos que ya habían comenzado a revivir. Seguel, como demócrata-cristiano, así lo quería. Tal como declaró en julio de 1983, era el deber de los partidos «asumir el papel que les corresponde en esta sociedad [...], [y] encontrar el punto en el que están de acuerdo y presentarle al pueblo un proyecto»¹⁴. Ni los sindicatos (que tenían sus propias peleas que dar) ni las aproximadamente mil organizaciones de base de las poblaciones podían articular fácilmente ese necesario «proyecto» nacional.

A pesar de que los partidos habían visto interrumpido su funcionamiento durante los diez años anteriores, nunca desaparecieron. El Partido Nacional se había desbandado patrióticamente tras el golpe y sus miembros, desde entonces, apoyaban al régimen. Los comunistas, a pesar de haber sufrido una dura represión, sabían cómo sobrevivir en la clandestinidad. En 1980, alejándose radicalmente de su histórica línea «pacífica» e inspirándose en parte en las revoluciones de Nicaragua e Irán, el Partido comenzó a desarrollar una táctica de insurrección masiva: su nuevo grupo de guerrilla urbana, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), había comenzado a ejecutar acciones terroristas menores —los rodriguistas tenían especial debilidad por los atentados contra los postes del alumbrado eléctrico y por los cortes de energía eléctrica—. Las redes nacionales del Partido Socialista habían sido mucho más desarticuladas por la represión. Sus divisiones

¹³ *Cambridge History of Latin America*, ed. por Leslie Bethell, vol. VIII, Cambridge, 1991, pág. 371.

¹⁴ Eugenio Ahumada et al., *Chile, la memoria prohibida*, vol. III, pág. 515.

internas se habían multiplicado, especialmente entre los exiliados, cuyos debates eran interminables. A comienzos de la década de 1980, se estaban consolidando sus dos facciones principales: primero, los socialistas retrógrados que aspiraban a reeditar todo el programa allendista y, segundo, los llamados «socialistas renovados» (influidos por la Socialdemocracia europea), para quienes el asociarse con los demócrata-cristianos ya no era del todo impensable. El mismo PDC, brevemente desorientado por la muerte de su héroe, Eduardo Frei (en enero de 1982), cobró nuevas fuerzas bajo la dirección de un nuevo presidente, el activo y fluido Gabriel Valdés. Sus técnicas incluían distribuir masivamente a los grupos locales de partidarios del PDC casetes concebidas para subirles la moral.

Junto con la aparición de las primeras protestas, se formaron dos coaliciones principales organizadas en torno a algunos partidos (agosto-septiembre de 1983). La primera, la Alianza Democrática, tenía por núcleo el PDC, la llamada «Derecha republicana» (los derechistas que comenzaban a distanciarse del régimen) y los «socialistas renovados», y contaba además con un asombrosa cantidad de grupos más pequeños —algunos antiguos (como los radicales), otros nuevos (como los humanistas)—. El Partido Comunista, excluido de la Alianza, formó su propio Movimiento Democrático del Pueblo (MDP), junto a la otra facción importante de los socialistas (los «socialistas de Almeyda») y lo poco que quedaba del MIR.

La movilización masiva de 1983-1986, sin duda, desconcertó al régimen. Como era de esperar, su respuesta fue la represión: cada protesta traía su propia cuota de muertos, heridos y arrestados. A finales de 1984, la policía y las tropas montaron una serie de brutales incursiones en las poblaciones. Por iniciativa del cardenal arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, once partidos (casi todo el espectro menos los comunistas) firmaron en agosto de 1985 un «Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia» —un consenso mínimo en favor de las elecciones libres, del restablecimiento de un régimen amparado por la ley y del reconocimiento de que la economía chilena debía ser «mixta»—. Pinochet no podía hacer nada frente a este acuerdo. En la víspera de Navidad de 1985 le dijo lisa y llanamente al cardenal que no se metiera en política. El capitán general había celebrado hacía poco su cumpleaños número setenta y estaba en excelente forma física, lo que recordó a los chilenos en un corto de televisión donde aparecía haciendo sus legendarios ejercicios matutinos.

El último número del periódico de oposición *Fortín Mapocho* (1985) publicó un titular en letras enormes: ÉL DEBE IRSE EN EL 86. Pero no lo hizo. A pesar de las demostraciones en las calles y en las sedes universitarias, Pinochet estaba decidido a seguir su calendario personal: la victoria en el plebiscito de 1988 y un segundo mandato hasta 1997. En septiembre de 1986, sobrevivió a un serio intento de asesinato (organizado por los rodriguistas). Su escape providencial y en gran medida también la economía finalmente revitalizada, sirvieron para fortalecer su posición. La oposición (o la mayoría de ella)

comenzaba lentamente a caer en la cuenta, con cierta reticencia, de que la única táctica práctica que le quedaba era trabajar dentro del marco de la odiada Constitución de 1980. La proposición de que había que tratar la Constitución como «un hecho» fue enunciada por primera vez en 1984 por Patricio Aylwin. En agosto de 1987, cuando éste volvió a hacerse cargo de la presidencia de su partido, sucediendo a Valdés, había muchas más personas preparadas para reconocer el «hecho» —aunque sólo fuera porque el propio régimen había comenzado a preparar activamente el plebiscito—.

Entre febrero y marzo de 1987, se abrieron los nuevos registros electorales y, a los partidos políticos no marxistas, se les permitió volver a constituirse con la condición de que reunieran 33.500 firmas de votantes registrados (a nivel nacional). Ése fue el momento de la verdad para la oposición. El nuevo y joven Partido Humanista (versión local de los partidos verdes de Europa Occidental) fue el primero en comenzar su campaña de registro. El PDC y otros partidos pronto se le sumaron. En agosto de 1988, más del 90% de los votantes calificados estaban registrados. Para los socialistas y otros izquierdistas excluidos del sistema, se creó oportunamente un partido funcional, el PPD («Partido por la Democracia»), que después desarrollaría una identidad propia. Finalmente, la derecha también volvió a entrar en la arena política, aunque en un estado de cierta confusión. A la larga, dividió sus fuerzas entre la tradicional y conservadora Renovación Nacional (RN), descendiente del antiguo Partido Nacional; y la tecnocrática y neoliberal Unión Demócrata Independiente (UDI), encabezada por Jaime Guzmán, ex-dirigente estudiantil gremialista, y uno de los más cercanos asesores de Pinochet durante años.

La Concertación de Partidos por el No¹⁵, formada en febrero de 1988, reunió a más de quince partidos y movimientos (sin incluir a los comunistas) en un esfuerzo mancomunado con el fin de ganar la votación por el No en el próximo plebiscito. Al igual que los liberales y conservadores de la década de 1950, los grandes batallones de la Concertación, el PDC y los socialistas (que se volvieron a unir en otro partido en diciembre de 1989), se condujeron como antiguos adversarios capaces de superar sus diferencias para luchar contra un enemigo común. Asimismo, algunos demócrata-cristianos y socialistas (otra vez el paralelo con la Fusión Liberal Conservadora resulta interesante) concebían la Concertación como una coalición de gobierno a largo plazo para llevar al país a una nueva etapa: la redemocratización, una amplia aceptación de la economía de mercado y un énfasis renovado en la justicia social.

Sin embargo, el electorado recién registrado tenía que ser persuadido antes que nada para negarle a Pinochet un segundo mandato. La campaña por el No bordeó la

¹⁵ No existe una buena traducción al inglés del término «Concertación». En realidad, significa «concierto» como en el «Concierto de Europa». N. del E.: aunque en una traducción española esta nota de los autores carece de sentido, optamos por conservarla por respeto a su celo profesional.

genialidad. Hizo a un lado el acoso de las autoridades —2.000 arrestos políticos en el primer semestre de 1988—. Utilizó las herramientas que los nuevos tiempos le ofrecían: recurrió a grupos de estudio, y a ordenadores y faxes para controlar la votación¹⁶. Consciente de que había al menos 3 millones de aparatos de televisión en Chile, utilizó de manera brillante los quince minutos de transmisión televisiva concedidos a regañadientes por el régimen. La votación se realizó el 5 de octubre de 1988. El No ganó el 54% de los votos; el Sí, el 43% (votó el 97% de la población registrada, el 92% de todos quienes estaban calificados). Fue un momento de inolvidable euforia para la Concertación.

El resultado enfureció a Pinochet. Mucho tiempo antes, otro plebiscito, señaló después, había elegido a Barrabás (¿qué tenía que ver esto con él?). No obstante, dejó claro que iba a cumplir su calendario y que se llevarían a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias como correspondía (según la Constitución de 1980). Éstas se fijaron para diciembre de 1989. La Concertación, llena de energías gracias a su éxito, estaba lista para generar una lista de candidatos común para el Congreso y elegir un presidente. Que el candidato fuera del PDC era inevitable, así como lo había sido el candidato radical para el Frente Popular en 1938. Para disgusto del resto de la Concertación, el propio PDC condujo una dura batalla interna antes de decidirse: Gabriel Valdés quería la designación, al igual que la estrella ascendente de la joven generación, Eduardo Frei, hijo homónimo del anterior presidente y un exitoso ingeniero y empresario. Sin embargo, Valdés finalmente se retiró manifestándose públicamente a favor del candidato evidente, Patricio Aylwin, cuya importancia se había visto muy fortalecida por su papel como portavoz oficial de la Concertación durante la campaña del plebiscito. Renovación Nacional y la UDI eligieron a Hernán Büchi, confiando en que su estilo de vida poco convencional podría ser atractivo. Un tercer candidato entró a la lid. Se trataba del millonario «populista» Francisco Javier («Fra Fra») Errázuriz, cuyos motivos para postularse no estaban del todo claros —quizá se debiera simplemente a que, después de todo, era un Errázuriz—. Se autoproclamó un «hombre de centro», lo cual no era.

En el año que iba entre el plebiscito y la elección, la Concertación se dedicó a conseguir una serie de enmiendas a la Constitución de 1980. En este esfuerzo fue apoyada por la positiva actitud de Renovación Nacional (y de su joven dirigente Andrés Allamand) y por el hábil manejo del último ministro del Interior de Pinochet, Carlos Cáceres, quien creía que el capitán general ganaría en honorabilidad con una estricta observancia de su

¹⁶ La oposición también aprovechó los aproximadamente dos millones de dólares que le dio la Administración de Reagan. Se ha dicho que una de las razones para esta generosidad habría sido que dicha Administración, obsesionada en la década de 1980 con derrocar el régimen revolucionario de Nicaragua, quería aparecer como equilibrada en sus tratos con América Latina. Para un estudio de la política norteamericana hacia Chile desde la década de 1960 a la de 1990, ver Paul Sigmund, *The United States and Democracy in Chile*, Baltimore, 1993.

propia Constitución. La Concertación no consiguió todo lo que quería, pero de todas maneras se acordó a la larga un paquete de enmiendas y éste fue aprobado (por el 86 % de los siete millones de votantes) en un plebiscito que se llevó a cabo en julio de 1989. Dicho paquete incluía el fin de la prohibición de los partidos que estaban «contra la familia» o en favor de la «lucha de clases» (Artículo 8), el aumento de la proporción de senadores elegidos, la simplificación de los procedimientos para la enmienda constitucional y cambios en la composición del nuevo Consejo de Seguridad Nacional (originalmente dominado por los militares). Además, como medida transitoria, se limitaba el próximo periodo presidencial a cuatro años.

Pinochet también se mostró conciliador en lo que se refería a la composición del directorio del Banco Central, a partir de entonces independiente del gobierno —un antiguo sueño de los *Chicago Boys*—. No obstante, la Concertación no consiguió cambiar el nuevo sistema de elecciones «binominales»¹⁷ decretado entonces, ni detener el último conjunto de leyes —llamadas «leyes de amarre»— por medio de las cuales Pinochet quería atar de manos a los futuros gobiernos. Éstas incluían la permanencia en el cargo de los funcionarios públicos, la inamovilidad de los comandantes en jefe y algunas privatizaciones más de último minuto. Otro punto adicional era la inamovilidad del general: fuera cual fuera el resultado de la elección, él seguiría siendo el comandante en jefe del Ejército hasta 1998.

Todo esto difícilmente parecía importar. Por primera vez en casi dos décadas, los chilenos gozaban las delicias recuperadas (y completamente desconocidas para una nueva generación) de una campaña electoral presidencial. El resultado reflejó, casi con exactitud, la votación del plebiscito. Aylwin ganó el 55% de los votos, sus dos rivales de derecha consiguieron el 43% entre ambos. En las elecciones parlamentarias, la Concertación obtuvo 72 de los 120 puestos en la Cámara de Diputados y 22 de los 38 puestos de senadores elegidos.

Una de las últimas tretas de Pinochet había sido la construcción del nuevo edificio del Congreso en Valparaíso —un engendro entre neobabilónico y posmodernista frente a la terminal de autobuses—. Esto formaba parte de un antiguo acuerdo con el almirante Merino, pero, sin duda, era considerado como un medio para bajarle los humos a los egos de los políticos que tendrían que trasladar su principal foro fuera de Santiago. Esta monstruosidad arquitectónica estaba a medio construir cuando, el 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin se ciñó la banda presidencial de Chile.

¹⁷ Esto inclinó la balanza hacia la derecha, gracias a las zonas rurales y también a la norma de que, en los distritos con dos puestos, el partido ganador podía quedarse con ambos si contaba con el doble de los votos del partido perdedor.

«REENCUENTRO CON LA HISTORIA»

El septuagenario Patricio Aylwin fue el primer presidente chileno con apellido inglés —y uno muy antiguo, cuyo significado original era «amigo de los elfos» (o simplemente «buen amigo»)—. Resulta tentador compararlo (a pesar de las muchas diferencias de carácter) con el emoliente presidente del siglo xx José Joaquín Pérez. En algunos sentidos, sus tareas eran similares; en otros, las de ahora resultaban mucho más intimidantes. La lucidez de Aylwin, su paciencia, su talento negociador, su sonrisa ligeramente irónica, constituían ventajas muy valiosas para un país que daba sus primeros pasos de vuelta a la democracia, a lo que él mismo, en su discurso televisado a todo el país en la víspera del Año Nuevo de 1990, llamó el «reencuentro» de Chile con su historia.

Las tareas del nuevo gobierno eran de tres tipos: tenía que reforzar el consenso democrático y, en particular, mantener buenas relaciones entre los civiles y los militares; debía manejar delicados asuntos relativos a los abusos de los derechos humanos cometidos tras 1973; y tenía que mantener el crecimiento económico al tiempo que se hacía cargo de las desigualdades sociales dejadas por el régimen saliente. El propio Aylwin advirtió que el progreso podía no ser rápido. Y no lo fue en todos los frentes. Aún así, Aylwin fue apoyado por una actitud constructiva generalizada de parte de los políticos (o la mayoría de ellos). Además, se encontraba bastante preparado para negociar, con los partidos de derecha que formaban la oposición, las iniciativas más contundentes (como las leyes tributarias y laborales de 1990). En el Congreso, el encanto y la autoridad de Gabriel Valdés, presidente del Senado, ayudaron a suavizar las relaciones entre los partidos. A comienzos de la década de 1990, la vida parlamentaria carecía un poco del brillo de épocas anteriores, lo cual no era de extrañar dado que ahora el Congreso estaba más restringido en sus funciones que antes de 1973. Así, el 90% de todas las leyes entre 1990 y 1994 surgieron en La Moneda. La voluntad de la Concertación de consultar a la oposición provenía en parte, sin duda, de la necesidad de reintegrar a la derecha (fuertemente inclinada a defender los logros del régimen saliente) en la corriente principal de la política, fortaleciendo así el consenso democrático. Dicho consenso puede haber parecido demasiado coactivo para algunos, pero probablemente reflejaba la voluntad general de los chilenos.

No obstante, la Concertación sabía que ciertas deudas de la historia reciente de Chile debían pagarse sin demora. En septiembre de 1990, los restos de Salvador Allende recibieron un funeral de Estado en Santiago y miles de personas saludaron el ataúd en su traslado desde Viña del Mar (donde había sido enterrado sin ceremonia el 12 de septiembre de 1973). La viuda de Allende describió el funeral como un momento de «reparación y reconciliación»¹⁸. Cinco meses antes, Aylwin había creado la Comisión de la Verdad y de

¹⁸ *El Mercurio*, 5 de septiembre de 1990.

la Reconciliación para elaborar un informe sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante los años de Pinochet. Dicha Comisión estuvo presidida por el anciano ex senador radical Raúl Rettig, quien cuarenta años antes se había batido en un duelo real, aunque sin consecuencias, con Allende¹⁹. El Informe Rettig, entregado en marzo de 1991²⁰, dejó al descubierto un oscuro panorama represivo, documentando más de 2.000 muertes y criticando fuertemente al poder judicial por su anuencia durante el régimen de Pinochet —lo cual enfureció a los impenitentes jueces de la Corte Suprema, uno de los cuales fue destituido luego por el Senado (junio de 1993)—. Aylwin creó un programa de compensaciones para las víctimas de la represión, pero la cuestión específica de los juicios quedó en manos de la Corte. El avance en este ámbito fue muy lento, lo que desalentó a los grupos en favor de los derechos humanos y a las familias que habían sufrido las violaciones. A mediados de 1993, Aylwin fracasó en sacar adelante una propuesta para acelerar los juicios (que permitiría el anonimato de los testigos)²¹.

Las limitaciones en este sentido eran evidentes. El Ejército estaba de vuelta en sus cuarteles, pero seguía manteniendo un alto grado de independencia con respecto al nuevo gobierno. A pesar de las esperanzas que la Concertación había puesto en la disolución de la CNI, ésta fue fusionada con el Departamento de Inteligencia del Ejército (DINE) y varios episodios (especialmente una escandalosa intervención telefónica en 1992) parecían indicar que el espionaje político seguía existiendo. Los registros de la DINA y la CNI, revelaría luego el Ejército, habían resultado destruidos en un lamentable incendio. El mismo general Pinochet se mantuvo impertérrito ante las muchas sugerencias de que debía renunciar al cargo de comandante en jefe. Escribió sus memorias (a la larga, cuatro volúmenes), que se vendieron sin demora, y sucumbió a la tentación de dárseles de lobo estepario. Algunas investigaciones realizadas por el Congreso y la prensa sobre ciertos escándalos financieros en los cuales estaban involucrados oficiales del Ejército (y su propio yerno) lo llevaron a ordenar un acuartelamiento general en diciembre de 1990; un alarde de poder militar que desató un breve nerviosismo en algunos políticos demasiado sensibles (y la indiferencia del público general). En mayo de 1993 rodeó el ministerio de Defensa con soldados y ordenó a los generales que vistieran ropas de combate para realizar maniobras. Éste parece no haber sido más que un pequeño (e innecesario) recordatorio para Chile de que él aún estaba allí. Aylwin manejó todas estas pullas con gran tacto y paciencia (le dijo al presidente del gobierno español Felipe González que

¹⁹ Para mayores detalles, ver Carlos Jorquera, *El Chicho Allende*, 1990, págs. 284-305.

²⁰ En 1993, siguiendo una de las recomendaciones del Informe, se construyó en Santiago un monumento a las víctimas de la represión, con 4.000 nombres grabados en un muro de mármol de 30 metros.

²¹ En 1993, el ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras, y su principal lugarteniente, fueron juzgados y sentenciados a prisión por su participación en el Caso Letelier. Los veredictos fueron ratificados por la Corte Suprema en mayo de 1995 y luego se aplicaron las sentencias respectivas.

era como si él estuviera gobernando España con el general Franco aún con vida.) No obstante, poner demasiado énfasis en las relaciones entre el comandante en jefe y el presidente como individuos puede inducir a error. A otros niveles, las relaciones entre los civiles y los militares iban adquiriendo bases más sólidas. El Congreso, por su parte, estaba cultivando conscientemente los lazos con las fuerzas armadas. Ahora se permitía que algunos civiles estudiaran junto con los oficiales en la Academia de Guerra. No obstante, aun cuando la perspectiva de una intervención militar mayor disminuía con el tiempo, es probable que ningún gobierno chileno pudiera ignorar al Ejército en el futuro.

El fortalecimiento del consenso democrático se vio reforzado evidentemente por el éxito económico. Los objetivos económicos de la Concertación pueden resumirse en la frase «crecimiento con equidad». Su programa aceptaba la economía de mercado como una realidad (aunque suspendió las nuevas privatizaciones) y ponía énfasis en controlar la inflación así como en seguir promoviendo las exportaciones, sumando también a sus preocupaciones la «deuda social» heredada del régimen de Pinochet. Los dos últimos años del régimen militar habían sido levemente inflacionarios, con un mayor gasto fiscal utilizado para conseguir un mayor apoyo del electorado. Alejandro Foxley, el nuevo ministro de Hacienda que era conocido internacionalmente por haber criticado el modelo neoliberal, refrenó el volumen de circulante y aumentó los impuestos corporativos y el IVA, comenzando a administrar las necesarias medidas correctivas. Este ajuste implicaba un crecimiento menor que el del primer año de Aylwin, pero después, la economía despegó con renovado vigor, con una rápida alza en las inversiones, y con el Banco Central a cargo de la modificación de la tasa cambiaria según fuera necesario. El peso se cotizaba formalmente según una «canasta» de monedas extranjeras: dólar-yen-marco alemán. A finales de 1992, año que Foxley describió como «el mejor año económico en tres décadas», Chile había gozado de ocho años de crecimiento ininterrumpido impulsado por las exportaciones. Y el crecimiento continuó en 1993 y 1994, llegando a los diez años.

Los numerosos viajes oficiales de Aylwin a países extranjeros, concebidos para restablecer las relaciones internacionales chilenas, representaban además una forma consciente de «promover las exportaciones». En 1991, Japón superó a los Estados Unidos como el país con el mayor mercado de exportaciones unitario y sus inversiones aumentaron significativamente. El gobierno japonés afirmó que Chile era el país de América Latina con el mejor coeficiente riesgo/inversión. En septiembre de 1991, Chile y México firmaron un tratado de libre comercio, que en un año duplicó el flujo entre ambas naciones. Las esperanzas a largo plazo estaban puestas ahora en un eventual acceso al proyectado Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), ratificado por el Senado de Estados Unidos a fines de 1993, y al mercado común (MERCOSUR) que entonces se estaba creando entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Tales estrategias se hicieron más necesarias que nunca a mediados de la década de 1990. El proteccionismo agrícola (espe-

cialmente en Japón y Europa) y las probabilidades de una renovada competencia desde el interior de América Latina (especialmente por parte de Argentina) constituían un desafío para quienes definían las políticas en Santiago. No obstante, los otros «modelos» parecían escasos y poco apropiados en esos tiempos. Como lo señaló en mayo de 1993 el economista jefe del ministerio de Hacienda: «O buscamos un crecimiento basado en las exportaciones o no crecemos para nada»²².

El gobierno de Aylwin no veía el crecimiento económico como un fin en sí mismo. Lentamente (quizá demasiado lentamente para algunos) comenzó a atacar la «deuda social», manteniendo algunos de los programas del régimen saliente, pero agregando también los propios. El nuevo Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), por ejemplo, encauzaba ahora su ayuda con sensibilidad y habilidad a las comunidades más pobres. El gasto social (en salud y educación) aumentó alrededor de un 30% entre 1989 y 1993, momento en el cual, según un informe de las Naciones Unidas, la cantidad de chilenos pobres había bajado del 40% al 33% de la población. A mediados de la década de 1990, había razones para afirmar que más chilenos estaban mejor alimentados, tenían mejores viviendas y gozaban de una mejor educación que nunca antes en la historia del país. No obstante, a pesar de estos signos de modernidad, el gobierno fracasó en términos de legislar a favor de una liberalización social. Se opuso, por ejemplo, a una Ley de divorcio o a eliminar las incapacidades legales que todavía afectaban a las mujeres casadas²³. De hecho, podríamos especular aquí que una de las consecuencias más inesperadas de los años de Pinochet fue cierta «reclericalización» de la sociedad: el papel de la Iglesia durante el periodo le había ganado a ésta un nuevo respeto²⁴. El antiguo componente laico, masón y librepensador de la cultura chilena (en todo su esplendor desde la década de 1880 hasta la de 1970) parecía tener mucha menor importancia en la década de 1990.

En el área laboral, la Concertación promulgó una nueva Ley (1990) para aumentar los derechos de los sindicatos del comercio y la negociación colectiva. El movimiento obrero, reunido ahora en una nueva confederación nacional (la Central Unitaria de Trabajadores, 1988), todavía tenía mucho terreno por conquistar y aún era mucho más

²² Joaquín Vial, citado en *The Financial Times*, Londres, 19 de mayo de 1993, pág. 31 (estudio sobre Chile).

²³ La pena capital, abolida en casi todos los países desarrollados, sigue existiendo en los estatutos de la nación.

²⁴ El papa Juan Pablo II visitó Chile en abril de 1987. La canonización de la primera santa chilena (Santa Teresa de Los Andes, monja carmelita ejemplar que murió en 1920 a la edad de diecinueve años) se llevó a cabo en Roma en marzo de 1993. Algunos anticlericales a la antigua habrían mostrado cierta suspicacia por el momento preciso en que se daban estos hechos. Se cree que algunos dirigentes del PDC habrían preferido la canonización de su jesuita favorito, padre Alberto Hurtado. Aunque él tampoco tendría que esperar mucho: en octubre de 1994 fue beatificado y varios miles de chilenos (incluido el presidente) viajaron a Roma para asistir a la ceremonia. Poco después, el arzobispo titular de Santiago, monseñor Carlos Oviedo recibíó la investidura púrpura, convirtiéndose en el cuarto cardenal chileno.

débil que en la década de 1960. Algunas huelgas modestamente exitosas fueron concertadas en El Teniente y Chuquicamata en julio y agosto de 1991. En octubre de 1992, los médicos del servicio nacional de salud se rebelaron contra los salarios y las condiciones de trabajo, situación que provocó la renuncia del agudo ministro de Salud, Dr. Jorge Jiménez.

En muchos sentidos, tales episodios podían considerarse simplemente como los síntomas de una revitalización gradual de la democracia. Así como el intermitente terrorismo urbano de esos años —dirigido por un grupo escindido del entonces inactivo FPMR y por un grupo rival, el MJL (Movimiento Juvenil Lautaro)— tampoco podía considerarse una amenaza seria a la estabilidad democrática, aunque aún era capaz de dejar huellas profundas. Como ocurrió especialmente con el asesinato del senador, y líder de la UDI, Jaime Guzmán, en abril de 1991. Una Ley de amnistía, que ofrecía a los terroristas un trato favorable si entregaban evidencia al Estado (septiembre de 1991), y la captura del principal dirigente lautarista (julio de 1992) ayudaron a la policía a controlar a los violentos. En todo caso, éstos eran repudiados por todos los sectores de la opinión pública —incluidos los grupos de izquierda que habían quedado fuera de la Concertación y habían formado a fines de 1991 el MIDA (Movimiento de Izquierda Democrática Allendista), creado en torno al Partido Comunista y liderado por el antiguo ministro de Hacienda Pedro Vuskovic—.

La reforma constitucional era un tema político inevitable en los años de Aylwin. No obstante, la derecha (con la ayuda de los «senadores designados») logró bloquear las propuestas de enmienda más serias de Aylwin (1992-1993), que incluían la restauración de los derechos del presidente para destituir a los comandantes en jefe y la supresión de los cupos de senadores designados. Aylwin tampoco pudo lograr cambios en el sistema electoral «binominal». Sin embargo, el gobierno y la oposición estuvieron de acuerdo en que las aproximadamente 300 municipalidades del país (todavía gobernadas por alcaldes designados por Pinochet) debían volver al régimen democrático. Por tanto, en junio de 1992 se realizaron las elecciones municipales correspondientes y los resultados arrojados coincidieron una vez más con los del plebiscito y la elección de 1989: la Concertación ganó más del 52% y la derecha, aún dividida, logró tan sólo el 30% de los votos (si incluimos a los seguidores de «Fra Fra» Errázuriz). El Partido Comunista (casi el 7%) aparecía cada vez más como la sombra de lo que había sido: tras las revoluciones de 1989 en Europa Oriental y la disolución de la misma Unión Soviética dos años después, el partido que una vez había representado un innegable marco de referencia, se veía reducido casi a su desaparición.

Dado que el periodo presidencial de Aylwin debía durar cuatro años (los mandatos futuros se fijaron en seis años en febrero de 1994), todos los precedentes de la historia chilena hacían que las maniobras para la próxima elección presidencial fueran absolutamente inevitables antes del final de 1992. El segundo Eduardo Frei ejercía una fuerte presión en la designación del PDC y, por ende, en la de la Concertación, donde el popular y

brillante socialista Ricardo Lagos (ministro de Educación de Aylwin de 1990 a 1992) era su principal rival. En lo que constituyó una clara innovación para una coalición política, las primarias dentro de la Concertación finalmente fueron acordadas. 500.000 personas votaron (mayo de 1993) y el ganador fue Frei, cuyos porcentajes en las encuestas de opinión pública eran altos. Como si se tratara de destacar las continuidades en la historia chilena, la derecha eligió (agosto de 1993) al senador Arturo Alessandri, nieto del León de Tarapacá. No obstante, para gran desilusión de la derecha, la Concertación se mantuvo disciplinada y unida —mucho más que cualquiera de las clásicas coaliciones del pasado—. De hecho, algunas de sus figuras más prominentes hablaban entonces de mantener la alianza por una década o dos —aunque, como reza el proverbio: «del dicho al hecho, hay un gran trecho»—. La victoria de Frei en las elecciones (11 de diciembre de 1993) parecía inevitable y así fue: triunfó con casi el 58% del voto popular (el porcentaje más alto desde 1931); el nieto del León obtuvo cerca del 25%. Por quinta vez en la historia de Chile, un hijo seguía los pasos de su padre en la presidencia. Y, lo que sin duda era más importante, la mayoría de Frei (más que la de Aylwin en 1989 y que la de su propio padre en 1964) representaba una reivindicación electoral de la coalición gobernante. Su mandato fue inaugurado (en el engendro arquitectónico de Valparaíso que ya estaba finalizado) el 11 de marzo de 1994.

* * *

Nuestra relación debe concluir aquí, ya que evaluar la presidencia en curso al momento de escribir este libro no es en realidad trabajo nuestro. Sin embargo, sí corresponde hacerse una pregunta general: ¿cuáles son las perspectivas para la restablecida democracia chilena? En un momento especialmente desconsolador de los avatares de la República (octubre de 1975), uno de los autores de este libro le preguntó al primer Eduardo Frei si acaso él tenía razones para abrigar algunas esperanzas. Frei contestó que no tenía «razones racionales» para el optimismo, pero sí varias «razones irracionales» y que la principal de ellas era «la esencia de la historia chilena», como él mismo lo enunció —una historia que había sido liberal y democrática con ciertos momentos de reforma constructiva²⁵—. La historia de Chile *ha sido* una historia de institucionalidad y, al menos en los últimos tiempos, de creciente democracia. A pesar del trauma de 1973 y sus prolongadas secuelas, esta tendencia básica parece bastante clara. El electorado chileno quizá haya sido más lúcido en la década de 1990 que nunca antes en el pasado, aunque la apatía entre los jóvenes y los pobres (que no es un fenómeno exclusivo de Chile) es algo que requiere mayor preocupación por parte de los políticos. Mucho depende de la capacidad de los gobiernos para promover «el crecimiento en equidad». El segundo presidente Frei ha expresado en

²⁵ Conversación con Simon Collier, Santiago, 15 de octubre de 1975.



reiteradas oportunidades la esperanza de que Chile pueda disfrutar del nivel de vida del sur de Europa para el año 2010. La reverencia por el mercado libre llegó a sus extremos más grotescos en el Chile de las décadas de 1970 y 1980. El presidente Aylwin, al final de su mandato, hizo algunas cáusticas observaciones a este respecto. La tarea tanto de los políticos como los ciudadanos (y no sólo en Chile, ya que esto se ha convertido en un problema mundial) es encontrar formas de combinar las ventajas del mercado con una mayor justicia social (una imperiosa necesidad en el futuro de todos nosotros) y de proteger el medio ambiente global cada vez más deteriorado.

Concluimos con una observación personal. Nuestras esperanzas están puestas en que el capítulo de la historia que comenzó en marzo de 1990 sea uno de los más felices para Chile, un capítulo en el que el trabajo constructivo supere la tensión y el drama excesivos. Si lo hace o no, depende, como debe ser, de la determinación y el sentido común de los chilenos.

Iniciales y acrónimos

AFP	Administradora de Fondos de Pensión (desde 1980).
ANAP	Alianza Nacional del Pueblo (coalición electoral ibaíista).
ANEF	Asociación Nacional de Empleados Fiscales.
API	Acción Popular Independiente (partido de don Rafael Tarud).
APL	Alianza Popular Libertadora (coalición ibaíista).
ASICH	Acción Sindical y Económica de Chile (movimiento sindical católico).
CAP	Compañía de Acero del Pacífico.
CEPRO	Centro de Producción (unidad agraria).
CERA	Centro de Reforma Agraria (unidad agraria).
CIA	Central Intelligence Agency (Estados Unidos).
CNC	Consejo Nacional Campesino.
CNI	Central Nacional de Informaciones (policía secreta).
CODELCO	Corporación del Cobre.
CORA	Corporación de Reforma Agraria.
CORFO	Corporación de Fomento de la Producción.
CORVI	Corporación de la Vivienda.
COSACH	Compañía de Salitre de Chile.
COVENSA	Corporación de Ventas de Salitre y Yodo.
CTCH	Confederación de Trabajadores de Chile (confederación sindical).
CUT	(1) Central Única de Trabajadores (1953). (2) Central Unitaria de Trabajadores (1988).
DINA	Dirección de Inteligencia Nacional (policía secreta).
ENAP	Empresa Nacional de Petróleo.
ENDESA	Empresa Nacional de Electricidad.
ENTEL	Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
ENU	Escuela Nacional Unificada (proyecto de reforma educacional).
FACH	Fuerza Aérea de Chile.
FECH	Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
FOCH	Federación de Obreros Chilenos.